



1. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA BALBO

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

Venimos hoy a este recinto donde vamos a continuar y concluir la discusión, como hacía más de una década que no pasaba, sobre las políticas, los recursos y los gastos que el Poder Ejecutivo ha planteado no sólo para este año sino también para los venideros. Es un hecho trascendente y no menor que estemos a dos meses de concluir el año votando en esta Honorable Cámara aquello que se piensa ejecutar en el próximo año; además, basado en proyecciones creíbles que son la base de una política también creíble.

No queremos discutir un simple “dibujo formal”, lo que queremos es anticiparnos para que los habitantes de nuestra Nación, cada uno en el lugar que tenga, pueda proyectar también su propia realidad. Es sobre la base de esas verdades que se construye y no en la nebulosa de relatos sin ningún tipo de sintonía con la realidad.

Como lo hicimos cuando votamos una Ley de Pymes, que por primera vez en muchos años reducía impuestos en nuestro país, ahora estamos también en un avance institucional que no es menor. El gobierno nacional propone gastar en 2017 un total de 2,5 billones de pesos, pero no de cualquier forma o al arbitrio de las reasignaciones de los ministros o del presidente, sino con esta ley que hoy pretendemos aprobar y que será guía y mandato para el Poder Ejecutivo. Voy más allá, esos 2,5 billones deberán ser gastados en los distintos planes propuestos tal cual fueron propuestos. Casi una verdad de Perogrullo, pero en los tiempos que corren es toda una novedad en la política argentina.

En este presupuesto están contenidas las propuestas de la actual administración, no como un discurso efectista de campaña; aquí están explicitados los proyectos concretos de gobierno, que en nuestro caso se corresponden con lo que planteábamos en campaña. En definitiva, está la gente, sus empleos, sus proyectos individuales, las empresas, su proyección, los más necesitados, las soluciones que se proponen, los reclamos de obras postergadas de las provincias. En resumen, lo que estamos votando hoy es una promesa que el Poder Ejecutivo pretende cumplir y deberemos ser, desde nuestra posición de legisladores, custodios de que así sea, porque nosotros estamos representando a millones de argentinos y también a millones de contribuyentes que resignan parte de sus ingresos para que el Estado los gaste y distribuya y, en definitiva, mejore la situación de todos y les iguale oportunidades de crecimiento.

Señores legisladores: no voy a hablar y repetir cifras que quienes me precedieron y quienes seguramente lo harán después van a explicar con gran detalle. Quiero detenerme en conceptos que considero centrales en la discusión de esta etapa de cambio de la Argentina. Como dije antes, parece que estoy refiriéndome a obviedades, pero lamentablemente la falta de institucionalidad es lo único que ha sido obvio y aquellos temas que, en otros países, e inclusive el nuestro, años atrás, ya se habían consolidado, nosotros debemos empezar de nuevo.



Dirección de Información Parlamentaria

Poner en discusión lo que se piensa gastar y de dónde se estima vendrán los recursos es la gran novedad, pero lo es porque se fundamenta en proyecciones serias de la economía, que pueden tener desviaciones, como cualquier proyección del futuro, pero que deberemos velar para que puedan corregirse a tiempo si esto sucede. Pocos parecen dudar de que la Argentina volverá al crecimiento económico en 2017 luego de años de estancamiento. Esto generará más empleo genuino y por supuesto que aportará más recursos al Estado que podrá destinar a aquellos gastos que son prioridad, como el apoyo a los que menos pueden esperar pues están hundidos en la pobreza o son jubilados de avanzada edad, la lucha contra la criminalidad y las obras de infraestructura que necesitamos para ser más competitivos.

Todos tienen derecho a reclamar más, pero la verdad es que la “sábana es corta” y si estiramos el gasto total, mayor será el endeudamiento o la inflación, al final “alguien” pagará y serán las generaciones futuras o los que hoy menos tienen. Por ello, se ha actuado con responsabilidad en cada partida presupuestaria.

También dice la verdad este presupuesto al señalar que nuestro déficit fiscal todavía mantendrá un nivel importante y no es que no haya voluntad de disminuirlo, sino que un recorte mayor en los egresos públicos llevaría a un sufrimiento insoportable de los que menos tienen.

Basta mirar por encima de las grandes partidas presupuestarias para advertir claramente cuáles son las principales propuestas. El tema de la pobreza como eje central. Si el Estado nacional no es capaz de mirar prioritariamente este tema poco o nada puede proponer en otros; pero la pobreza atacada como estadista y no en forma populista o clientelar. Es necesario atacar la pobreza desde la generación de empleo y se requiere para ello del concurso de la inversión privada y de la pública. Esto sólo se logra en un marco de confianza que estamos creando todos los días y que queda muy claro en este presupuesto. Pero mientras la inversión se concreta y se crean las condiciones, este presupuesto destina en Asistencia Social, Educación y Jubilaciones, junto a otras áreas prioritarias para los que menos tienen, una parte sustancial de las erogaciones. Así es que las prestaciones a la Seguridad Social crecerán en promedio un 35 por ciento mientras que el gasto total sólo se estima crecerá un 22 por ciento.

Los recursos destinados a infraestructura son también cuantiosos. Caminos, obras de riego, transporte son básicos para revertir años de desinversión y este presupuesto tiene una especial dedicación a estos componentes que mejorarán la vida de mucha gente, especialmente la de menos recursos, generarán empleos y darán una mejor perspectiva de competitividad para atraer inversiones privadas. Para muchas pymes, especialmente las más alejadas de Buenos Aires esto significará ir en el proceso de igualar oportunidades de competir. Un país más federal en todas sus dimensiones. Aquí también se espera un crecimiento superior al promedio con más del 32 por ciento.

Regionalmente también se propone un cambio sustancial. Durante años el país ha tenido políticas que han generado desequilibrios regionales según los intereses políticos del momento. Hoy se trabaja con todas las regiones tratando de resolver sus situaciones sin amiguismo político. En lo que existen pocas dudas es en la necesidad de priorizar gasto en las regiones más postergadas y por ello es que tanto en infraestructura como en asistencia social el Norte tiene un privilegio. Es convicción de gran parte de la dirigencia argentina y del Poder Ejecutivo que en los próximos años hay que trabajar en la igualación de esta región y esto está expresado claramente en este presupuesto.



Dirección de Información Parlamentaria

El tema educativo no es menor. ¿Qué duda puede caber que nuestra enseñanza ha atravesado el más nublado de los caminos? Los resultados de años de pocos recursos o mal utilizados han hecho que de ser la Argentina uno de los faros culturales de Latinoamérica se encuentre con más del 50 por ciento de jóvenes que abandonan la escuela secundaria y el nivel de los que la terminan está comparativamente muy abajo cuando se les toma un examen internacional equivalente. Una mejor educación es el gran legado que podemos dejar a nuestros descendientes; serán así ellos los que construirán un país mejor y, además, sobre la base de recordar aquello que nuestros abuelos tanto querían: que sus hijos pudieran llegar más alto que ellos. Es la única forma de igualar oportunidades, y es así que este presupuesto destinará a este objetivo casi el 7 por ciento del total de las erogaciones.

Por último, quiero referirme a innovaciones muy trascendentes que confirman nuestra voluntad de cambio. En primer lugar, una cosa es presupuestar, y otra, administrar ese presupuesto. En nuestra lucha contra la corrupción hay cambios que parecen pequeños, pero son de gran trascendencia: estamos cambiando la forma de subsidiar y evitar así el clientelismo. Por ello, comenzamos a trabajar subsidiando la demanda y no la oferta. Baste un ejemplo: la Tarifa Social Federal de subsidios al transporte, el agua, el gas y la electricidad se otorga a personas vulnerables o de escasos recursos en lugar de destinarlos a las empresas proveedoras de esos servicios. La tragedia de Once es un ejemplo dramático de la importancia de este cambio. Creemos en los subsidios, pero no en la corrupción que ellos pueden generar.

Otro tema no menor es el presupuesto en modernización del Estado. En 2017 se destinarán más de 2 mil millones de pesos 0,8 por ciento del presupuesto total para el ministerio encargado de esta tarea. ¡Cuánto sabemos y nos quejamos de lo mal que funcionan muchas actividades del Estado en relación con la sociedad a la que, en teoría, sirven! El Estado no es una caja de recaudación para empleos públicos, está para servir a la gente y mejorarle la vida. Este es otro cambio de rumbo que el Poder Ejecutivo ha emprendido y que muestra la voluntad de que nuestro país vuelva a estar en ese sitio que un siglo atrás muchas naciones del planeta envidiaban.

Por eso, pido a todos mi colegas legisladores que además de los aportes y cambios sugeridos en las comisiones acompañen con su voto afirmativo este camino de cambios que propone el presupuesto.

2. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA BARDEGGIA

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017. BARILOCHE CONTRA EL AJUSTE EN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD

¿Por qué nos movilizamos?

Porque como barilochenses y como trabajadores, trabajadoras y estudiantes del sistema público de ciencia, tecnología e innovación productiva comprometidos con el bienestar social, queremos expresar nuestra preocupación por el proyecto de ley de presupuesto



Dirección de Información Parlamentaria

de gastos de la administración nacional 2017. Dicho proyecto, actualmente en discusión en el Congreso de la Nación, plantea una reducción drástica y regresiva que lleva la inversión en ciencia y tecnología al mínimo histórico desde la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva MINCYT. Para dar un ejemplo, la participación del MINCYT en el presupuesto nacional, más el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Conicet y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales CONAE, es decir, MINCYT más Conicet y CONAE, baja del 0,74 por ciento, en 2015, a 0,65 por ciento, en 2016, a 0,59 por ciento, en 2017.

Esto significa que el actual gobierno de Mauricio Macri, quien durante su campaña sostuvo que iba a destinar al sector el 1,5 por ciento del PBI porque creía que la ciencia y la tecnología era política de Estado, no sólo incumple su promesa electoral, sino que, de convertirse en ley su propuesta, producirá un fuerte impacto en la calidad de vida de los habitantes de nuestro país en general y de nuestra comunidad en particular. Ese impacto no es algo sencillo de revertir, en tanto la inversión en educación, ciencia y técnica supone varios años hasta que empieza a dar resultados.

Nos movilizamos, además, para denunciar las actividades del Ministerio de Modernización, que a esta altura debería haberse renombrado como Ministerio de Despidos. Organismos de Ciencia y Técnica como el Conicet, la Comisión Nacional de Energía Atómica CNEA y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA ven peligrar su autonomía y autarquía para designar personal investigadores e investigadoras, técnicos y técnicas, personal de apoyo de acuerdo con el diseño de políticas institucionales propias. En efecto, a lo largo de este año, y en vías de consagrarse con la nueva ley de presupuesto nacional, todos los contratos e incorporaciones de estas instituciones a planta deberán pasar por el filtro del Ministerio de Modernización esto equivale a despidos, que decide de manera arbitraria, sin explicitar criterios, y tira por la borda los esfuerzos realizados por estas instituciones para generar mecanismos transparentes y democráticos, con criterios políticos y científicos claros y orientados a desarrollar la ciencia y la técnica en el país.

Más datos del ajuste, o acerca de “la noche de los presupuestos cortos”.

Si se observa el cuadro comparativo de la asignación de recursos elaborado en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, se puede advertir que algunos institutos tienen un leve aumento de presupuesto; sin embargo, al tratarse de aumentos muy menores a la inflación actual superior al 40 por ciento, ello también implica un recorte en términos reales. Tal es el caso del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI y del Instituto Nacional del Agua INA. Otros, como la CONAE, directamente ven reducido su presupuesto en pesos.

Es particularmente alarmante la situación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica ANPCYT, que financia gran parte de los programas de investigación del país, y que sufre un recorte del 32,3 por ciento.

Asimismo, en el caso del Conicet preocupa que, a pesar de la "corrección" propuesta por el gobierno de Cambiemos, a raíz de los enérgicos reclamos de la comunidad científica la aprobación del presupuesto 2017 conducirá a una dramática reducción del número de becas doctorales y posdoctorales, de ingresos a la carrera de investigador, de incorporaciones apoyo y de todos los recursos necesarios para llevar adelante los proyectos de investigación, presentes y futuros, que dependan de este organismo.

Dirección de Información Parlamentaria

En cuanto al presupuesto universitario, que en nuestra provincia comprende las universidades nacionales del Comahue UNCO y de Río Negro UNRN , el proyecto de presupuesto 2017 considera aumentos del 31 por ciento y del 40 por ciento, respectivamente; pero esas cifras son engañosas ya que no tienen en cuenta el aumento del dólar ni la inflación. Por consiguiente, si consideramos ambos elementos o sea precio del dólar e inflación , el presupuesto 2017 implica un recorte del 3,3 por ciento para los gastos estimados de la UNCO y el aumento de la UNRN se reduce al 8 por ciento en términos reales. Así, ambas instituciones se quedarán sin poder afrontar las paritarias del año 2017, lo cual, sin lugar a dudas, redundará en la insuficiencia de recursos humanos para una educación de calidad y en una mayor deserción de estudiantes.

Efecto dominó.

La desinversión en ciencia, técnica y universidad generará una reacción en cadena, un efecto dominó con consecuencias profundamente negativas no solo para el desarrollo independiente del país, sino también -considerando la matriz productiva de nuestra ciudad y nuestra provincia para nuestra comunidad.

Precisamente, en Bariloche, el sector público representa casi un cuarto del empleo total; y dentro de este sector, el científico y tecnológico INTA, Conicet, Centro Atómico Bariloche , representa el 11 por ciento. Por su parte, el sector universitario UNRN, UNCO, Universidad Nacional de Cuyo y Universidad Tecnológica Nacional , el 5 por ciento.

A su vez, del Centro Científico Tecnológico Conicet-Patagonia Norte dependen diez institutos, tres de los cuales están en Bariloche: el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente; el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, y el Instituto Andino Patagónico de Tecnología Biológicas y Geoambientales. En los institutos de nuestra ciudad hay alrededor de 252 becarios y becarias, más de 270 investigadores e investigadoras y personal de apoyo y administrativo. A esto hay que sumar otras unidades asociadas al Conicet tales como la Fundación Bariloche, Parques Nacionales, el Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, el Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad, lugares donde también se radican investigadores, investigadoras, becarios y becarias.

¿Cuál será entonces el impacto, a nivel local, del recorte presupuestario?

Pues ese 16 por ciento de trabajadores y trabajadoras que mencionábamos más arriba, vinculados a los sectores de ciencia, técnica y universidad, representan una masa salarial relativamente alta que se traduce en consumo y generación de puestos de trabajo en otros sectores de la economía local.

Además, cabe considerar que un alto porcentaje de los proyectos de ciencia básica radicados en estos centros, institutos y unidades asociadas se financian con subsidios de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica ANPCYT , y se nutren del comercio y la industria de nuestra ciudad. Por consiguiente, en caso de una disminución de los recursos de investigación, el impacto en la economía local será irrefrenable. Asimismo, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y las actividades universitarias en



Dirección de Información Parlamentaria

nuestra localidad-región se traducen en prácticas de intervención comunitaria o de extensión tendientes a resolver distintas problemáticas socionaturales y productivas, vinculadas, por ejemplo, a derechos humanos, migraciones, políticas indígenas, desarrollo territorial, patrimonio cultural, biodiversidad y uso sustentable, prevención de incendios, vulcanismo, contaminación de costas de lagos, separación y reciclado de residuos, compostaje, salud animal, producción forestal y producción de alimentos, entre otras.

Otro caso particularmente importante a nivel local es el de las medianas y pequeñas empresas que elaboran diferentes productos con altos niveles de integración para la CNEA. En el caso del INVAP, por ejemplo, preocupa pensar que algunos proyectos de gran envergadura vayan a ser cancelados o paralizados en función de lo que se defina para el presupuesto 2017. En este mismo sentido, es de suponer y alertar que algunas pymes, vinculadas con el sector de ciencia y tecnología, tenderán a reemplazar la inversión por la supervivencia o directamente afrontar el cierre, con la consecuencia social de que personal muy capacitado emigre hacia otros destinos, tal como lo hemos experimentado en el pasado.

La lucha que se pierde es la que se abandona.

La desinversión en ciencia, tecnología y universidad no representa solo una amenaza para las fuentes de trabajo-ingreso vinculadas con dichos sectores, sino que pone en riesgo los diferentes proyectos que actualmente están en curso. Muchos de estos proyectos, dijimos, son de carácter estratégico y están directamente relacionados con la capacidad de construir una comunidad y un Estado soberano. En efecto, en su gran mayoría, los proyectos científicos repercuten en el tejido productivo estimulando el desarrollo industrial del país y extendiendo y profundizando el mercado laboral al generar más puestos de trabajo de calidad, en comparación con la economía primaria. En este sentido, consideramos que el “plan de la austeridad” de moda en los países menos desarrollados de Europa constituye una falacia. Al mismo tiempo que el gobierno macrista recorta en ciencia, técnica y universidad, beneficia a los sectores sojeros, mineros y de exportación vacuna con una reducción impositiva. En otras palabras, beneficia las actividades primarias que tienen escaso nivel de integración, una muy baja demanda de mano de obra y un alto nivel de concentración de capitales para unos pocos que, en algunos casos, ni siquiera son argentinos.

Por eso, insistimos en que no solo nuestros trabajos y proyectos están en juego, sino más fundamentalmente, una política científica y universitaria que impacta directamente en el desarrollo, la industria, la generación de trabajo calificado, la construcción de soberanía tecnológica y la justicia y equidad social de nuestro país.

Por último, convocamos a la comunidad en su conjunto para que acompañe y se involucre en un reclamo que nos afecta a todos y a todas, y exigimos:

1. Un aumento sustancial del presupuesto de ciencia, tecnología y universidad que garantice con normalidad la actividad de investigación, educación y extensión de todos los organismos de ciencia y tecnología, y de la universidad pública.
2. La inmediata recomposición salarial para todos los trabajadores y todas las trabajadoras, investigadores e investigadoras, docentes y de apoyo, que permita que recuperemos el poder adquisitivo perdido por la inflación, la devaluación y los



Dirección de Información Parlamentaria

“tarifazos”.

3. Apertura de paritarias en el sistema científico y el fin de la precarización laboral en ciencia y universidad.
4. Rechazo a la derogación de los Artículos 6, 7 y 12, que garantizan la autarquía de los organismos de ciencia y tecnología, y universidad. Efectivización de los ingresos CIC y CPA 2015.
5. Cese de las políticas que atacan el acceso y la permanencia de los estudiantes. Por un boleto educativo universal y gratuito. Incremento de las becas estudiantiles en cantidad y en monto.
6. El cumplimiento efectivo del convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios en todas las universidades nacionales.
7. Derogación de la Ley de Educación Superior menemista y su reemplazo por una nueva que garantice la enseñanza, la investigación, la extensión universitaria, el ingreso irrestricto y la gratuidad. Por una universidad al servicio de las grandes mayorías nacionales.

Asimismo, nos sumamos a los reclamos por:

1. El fin de la criminalización de la protesta social, la derogación del protocolo represivo, la Ley Antiterrorista y el desprocesamiento de los luchadores populares.
2. Exigimos el cese de los despidos y la inmediata reincorporación de los cesanteados.

No al ajuste en ciencia, tecnología y universidad.

Adhieren a este comunicado trabajadores y trabajadoras, investigadores e investigadoras, becarios y becarias, docentes, personal de apoyo y administrativo y estudiantes del sistema científico, tecnológico y universitario nacional pertenecientes a las siguientes instituciones y organizaciones: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Conicet , Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio Iidypca , Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente Inibioma , Centro Atómico Bariloche CAB , Instituto Balseiro, UNCUIYO, Comisión Nacional de Energía Atómica CNEA , Universidad Nacional del Comahue CRUB-UNCO , Universidad Nacional de Río Negro UNRN , Instituto de Tecnología Agropecuaria INTA , Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI , Científicos y Universitarios Autoconvocados CYUA-Bariloche , Fundación Bariloche, Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo Citecde , Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad CIETES , Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Río Negro ADURN , Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue ADUNC , Sindicato Docente Universidad de Río Negro Sidunrn , Ministerio de Desarrollo Social, seccional Bariloche.

3. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BRIZUELA DEL MORAL



Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

En atención al tratamiento conjunto de diversos órdenes del día que avanzan, respectivamente, en el abordaje de modificaciones a la ley de administración financiera y en el tratamiento de la ley de presupuesto para el próximo ejercicio, quisiera explayarme en algunas consideraciones como hombre público al que le cupieron responsabilidades de gobierno y ahora, como legislador, representa los intereses de un pueblo como el catamarqueño. No estamos tratando cualquier ley, sino justamente aquella que debe atender a preceptos constitucionales teniendo en cuenta el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, promoviendo medidas de acción positiva -y vaya si la distribución de recursos y asignación de partidas para diversos gastos de la Nación lo es- que tiendan a disminuir las brechas de un país asimétrico, macrocefálico, con bolsones de desarrollo y de subdesarrollo en su amplio espacio territorial. No es casual que, como todos los años y en mis tiempos de gobernador también lo fue, estos meses sean de tensión y muy propicios para el diálogo político, sin importar los signos y colores que nos distinguen. El peregrinaje a esta suerte de “meca”, que es Buenos Aires, ve deambular por pasillos de diversos ministerios y de este Congreso, a intendentes y gobernadores tratando de buscar dividendos para obras y acciones que puedan volcarse y visualizarse en cada uno de los territorios y pueblos a los que representan.

Pienso que esto también guarda relación con un inveterado incumplimiento de este propio Congreso y de los gobernadores de provincias, como agentes naturales del gobierno federal, quienes desde 1996 venimos arrastrando una deuda con la Constitución y con el país: la sanción de un nuevo régimen de coparticipación federal anclado en consonancia con el inciso 2° del artículo 75° de la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, que obliga a la sanción de una ley convenio entre los actores que he mencionado, y cuyo texto, según recuerdo, expresa: “La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Lo primero que quiero manifestar en relación con los temas en análisis es la íntima satisfacción de que este Congreso recupere –y ojalá para los tiempos- una de sus facultades centrales como la de sancionar la ley de distribución de gastos y cálculos de recursos, porque eso es el presupuesto, de modo efectivo y certero, pues hasta 2015 era solo una expresión de deseos ya que por el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, la voluntad de este poder del Estado era reemplazada luego por la de un hombre no electo por el pueblo con el título de jefe de gabinete de ministros, quien podía modificar de manera discrecional y por vía de decisión administrativa lo que un poder del Estado había plasmado en una ley.

Pensar de modo sencillo este ejercicio habla a las claras de la magnitud del cambio que, como oficialismo hoy en este cuerpo, estamos promoviendo, recordando que esta actitud la sostuvimos durante muchos años cuando nos tocó, desde la oposición, pedir al



Dirección de Información Parlamentaria

entonces oficialismo que respetara no ya la voluntad de este cuerpo sino la efectiva división de poderes como base del sistema republicano en la Argentina, Dicho esto, y en relación con el otro tema que estamos abordando en forma simultánea, el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2017, aquí se ha dicho y con razón que estamos por aprobar uno de los presupuestos más federales de los últimos años. Y ello tiene validez en tanto en todos los anteriores podíamos incluir decenas y decenas de obras y aportes para todo el territorio, pero que luego de un plumazo y por capricho del poder ejecutivo, a través del jefe de gabinete, eran borradas o cambiadas de destino, según el color político de turno y la sumisión al poder central que gobernó el país hasta diciembre de 2015.

De hecho, el federalismo del proyecto de ley que estamos tratando y al que se refirió el miembro informante del despacho de mayoría, lo es en la medida de desterrar las facultades que asignaban la suma del poder al jefe de gabinete de ministros, más allá – claro está- de devolver a las provincias el 15 por ciento de la masa coparticipable uno de los temas centrales en el que hizo eje mi gestión al tiempo de asumir en esta Honorable Cámara-, de financiar el déficit de las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas y de incluir cuantiosas partidas para la efectiva ejecución del Plan Belgrano.

Algunas consideraciones desearía agregar sobre diversos aspectos de esta iniciativa: la primera, relacionada con el Plan Belgrano. Muchos aquí saben, y de hecho, también el señor presidente de la Nación y los miembros de su gabinete, acerca del interés particular que he puesto en la génesis y el desarrollo del Plan Belgrano, como un hombre de ese Norte grande. En marzo presenté un importante trabajo sobre “aportes de Catamarca para el desarrollo del Plan Belgrano”, viendo con beneplácito que algunas de las iniciativas que plasmé en ese trabajo se están haciendo realidad, y que incluso abordé en este Congreso desde 2013, como la obra del complejo “Potrero Del Clavillo”, que luego de décadas de retraso y postergación cobra nuevamente vuelo incluso en el proyecto en tratamiento.

De igual modo debo señalar que aún falta mucho. Y digo que falta mucho por ver un Plan Belgrano que efectivamente permita disminuir las asimetrías y achicar las brechas, incluso al interior mismo del Norte grande, pues como sostuve en el trabajo al que aludí, no debemos, solo en la planificación de las obras y proyectos, mirar un eje de desarrollo Norte-Sur ligado al puerto y a las zonas núcleo del país, sino promover un efectivo desarrollo de la infraestructura vial, férrea, energética e incluso aérea, en sentido Este-Oeste que permita la conectividad Atlántico-Pacífico con una mirada más continental.

Otra especial preocupación en la que deseo hacer hincapié esta en relación directa con el tema del financiamiento de las universidades nacionales. Todos aquí sabemos la manda constitucional establecida tras la reforma de 1994, que asigna a este Congreso, en el inciso 19 del artículo 75, la atribución de “Proveer lo conducente al desarrollo humano...”, “...a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico...” y “...Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.” Este Congreso ha dado en los últimos años importantes pasos en orden a la creación de



Dirección de Información Parlamentaria

entidades universitarias en diversas regiones del país, a las que he apoyado en forma decidida, más allá de los intereses políticos que pudieron darse detrás de dichas creaciones. He sido un hombre formado en una universidad pública y he forjado mi carrera política a partir del bagaje cultural que me brindó un centro educativo público y gratuito y, por ende, siempre apoyaré la universidad pública, pero quiero poner en perspectiva algunos señalamientos respecto del financiamiento y, particularmente, de su distribución entre universidades de reciente creación respecto de otras más tradicionales o antiguas e, incluso, supeditando el volumen y distribución del financiamiento al número de matrícula que poseen los distintos centros universitarios en todo el país. Entiendo que la mejora de la calidad educativa debe darse en el marco de un plan de educación superior que complemente e integre los recursos de cada institución existente, y sea parte de un programa integral para mejorar las condiciones educativas del país, cumpliendo con la manda constitucional que nos obliga a actuar en orden a promover la igualdad de oportunidades y de posibilidades sin discriminación alguna.

Todas estas consideraciones que he mencionado sucintamente me llevan a reflexionar sobre la oportunidad, el mérito y la conveniencia de avanzar con una propuesta de modificación en el proyecto en tratamiento, sumándome a la discusión que se está dando en este marco respecto de la planilla de distribución de fondos a las universidades o bien, que demos aprobación al mismo, pero con dos compromisos que debe asumir este Congreso y el Poder Ejecutivo a través del jefe de gabinete de ministros: este poder, tratando a la brevedad, definitivamente, la actualización de la Ley de Educación Superior de la Nación y el Poder Ejecutivo, por conducto del jefe de gabinete y el ministerio de Educación y Deportes, en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional, dando la discusión necesaria para proceder –en uso de las facultades de redistribución asignadas al jefe de gabinete por la Ley de Administración Financiera-, introduciendo las reformas en la distribución de recursos que sean necesarias, para contemplar los requerimientos de todos los centros universitarios del país.

Con lo expuesto, adelanto el voto positivo en general y en particular, de los diputados del bloque del Frente Cívico y Social de Catamarca, a los dictámenes recaídos en los proyectos de referencia.

4. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BUIL

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

Durante muchos años se trataron en esta Cámara proyectos de presupuesto que eran infundados en datos estadísticos irreales y supuestos macroeconómicos inconsistentes. Se presentaban obras que se anunciaban fervientemente y luego no se ejecutaban, llegando a subestimarse ingresos y gastos por encima del 25 por ciento. Además, la voluntad de los legisladores oficialistas -en su natural apoyo al Poder Ejecutivo- o con suerte algún opositor que incorporaba alguna partida o lograba cambiarla, era vulnerada posteriormente por el uso irrestricto de los poderes extraordinarios del jefe de Gabinete

Dirección de Información Parlamentaria

de Ministros que modificaba partidas sin el control parlamentario. . Esta circunstancia que se ha planteado hoy de limitar por ley esas facultadas extraordinarias—estoy hablando de un proyecto que surgió del propio Poder Ejecutivo—, demuestra una decisión política que conlleva al fortalecimiento institucional y al respeto por la labor y el rol legislativo.

Hoy estamos tratando un proyecto de presupuesto elaborado con variables creíbles, que pondera índices reales y, sobre todo, evidencia una planificación en cada área de gobierno que muestra un rediseño para nuestro país que es esencial para determinar el cambio. Un rediseño que ya comenzó este año adaptando el presupuesto heredado, que se plasma en el ejercicio 2017 y que se proyectó inteligente y responsablemente a 2018 y 2019.

Durante un mes y medio, como no sucedía en este Congreso antes, vinieron los ministros a explicar sus políticas públicas y sus inversiones, exponiéndose al interrogatorio de todos los legisladores, mostrando su apertura al diálogo y, sobre todo, su voluntad de escuchar y recoger la opinión de los opositores.

Es obvio que todos queremos más para nuestras provincias, que nos puede preocupar un tema en particular y deseamos que se destinen más partidas para fortalecerlo, pero el presupuesto no es ilimitado. Se priorizaron las políticas sociales en la necesidad primaria de asegurar ingresos a los sectores pobres de nuestra Nación, y la infraestructura que es sinónimo de desarrollo y generación de empleo. Está bien que se planteen otras necesidades, pero como hombre del interior bonaerense le digo, señor presidente, que las prioridades de este presupuesto son las que esperamos hace años y años, para poder sentar las bases de una proyección de país sustentable. Eso ya se demuestra desde ahora, cuando se tuvo que gobernar con un presupuesto que no fue elaborado por la actual gestión de gobierno y, sin embargo, se están llevando a cabo acciones concretas y transformadoras.

En materia social, se aprobó la Ley de Reparación Histórica para los Jubilados, se implementó la Pensión Universal para Adultos Mayores, se multiplicó por siete el Seguro de Desempleo. Además, todos los niños tienen asegurado un ingreso sin considerar si sus padres tienen un trabajo formal o no. Se dieron a 300.000 personas más la AUH.

En materia de infraestructura, por ejemplo, escuchábamos en estos días lo que significó para Tucumán la modificación de su Aeropuerto para el incentivo de la producción de arándanos que generaría unos 20 mil puestos de trabajo; o las mejoras en el Belgrano Cargas para unir las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco y Santiago del Estero con los puertos de exportación de Rosario o el paso minero a Chile.

Por otro lado, también puedo hablar posicionado desde la zona donde vengo, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde empezaron a despertar obras dormidas por décadas, como las autovías de las rutas nacionales números 5 y 7, la determinación de ruta segura para la ruta nacional 33, o la determinación de obras hídricas que estaban en el olvido, como la cuarta etapa del dragado del Salado. También el existe el rediseño de sistemas hídricos en la provincia de Buenos Aires para mitigar inundaciones como, por ejemplo, el sistema del río V. No debemos olvidar, lógicamente, lo que significa para los territorios las inversiones en redes de agua, cloacas y en viviendas, además del incremento al Fondo Sojero que derrama en los municipios.

Vale destacar que las obras se empiezan y se terminan en los plazos establecidos. Se



Dirección de Información Parlamentaria

hacen con un plan estratégico y se presentan a lo largo y ancho del país.

El criterio federal de este presupuesto determina en sí un criterio del gobierno que como ningún otro afrontó este tema. Un presidente de la Nación y un ministro del Interior que tienen la convicción de un país federal, que devuelve a las provincias fondos que les pertenecen, pero que a su vez trabaja mancomunadamente con ellas, sin distinciones partidarias, contemplando sus necesidades y sobre todo planteando políticas públicas en pos de sus desarrollos. Además, la implementación del Plan Belgrano contempla con fuerza, por primera vez, especialmente a nuestros compatriotas del Norte. Lo hace con una mirada que pretende incorporar obras y acciones que den oportunidades, más allá de la mera contención.

El federalismo se hace escuchando a todos, dialogando con todos, siendo equitativos, y no imponiendo o reduciendo las políticas públicas al amiguismo o la demagogia.

En un país con déficit fiscal, afectado por índices de pobreza altos, es necesario ser responsables y diseñar políticas para el conjunto. Mitigar la pobreza tiene un solo camino que es la generación de empleos genuinos en todo el país y principalmente en el interior de cada provincia, donde los habitantes migran a los conurbanos complejos, y en esa línea está este presupuesto y es lo que nos permitirá ser más federales.

Nosotros, como legisladores, tenemos un debate pendiente que es el de los repartos de los recursos donde la provincia a la que yo pertenezco, la de Buenos Aires, es la más discriminada. De cada 100 millones de pesos que se recaudan en el país, 37 son aportados por los habitantes de la provincia de Buenos Aires, que recibe en devolución apenas 18. Estos datos duros dejan en evidencia la necesidad de rediscutir la repartición de los recursos federales. Si bien la posibilidad de avanzar en una nueva ley de coparticipación federal está latente, consideramos que la provincia de Buenos Aires necesita una reparación urgente. Una de las posibles soluciones sería, sin lugar a dudas, rediscutir el Fondo del Conurbano Bonaerense. Específicamente considero más que necesario eliminar el tope de este fondo de 650 millones anuales, que se encuentra congelado desde 1996.

La discriminación es tal que, según proyecciones para el corriente año, la provincia se privó de recibir recursos por alrededor de 50 mil millones de pesos, lo que equivale al doble del déficit de la provincia.

Entre 2011 y 2015 por el tope fijado, Buenos Aires recibió solo 3.250 millones; resigno así 104.377 millones del fondo que en 1992 fue creado específicamente para ella. Con lo que perderá este año, en total habrá resignado 152 mil millones.

La ciudadanía está expectante, no por el presupuesto que votemos hoy en la Cámara de Diputados. Lo está para que nuestro país continúe buscando un rumbo distinto, y este presupuesto es una herramienta que tiene que ver con eso.

6. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CARMONA

**Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
fiscal correspondiente al año 2017.**



Dirección de Información Parlamentaria

Si bien las objeciones al Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio Fiscal correspondiente a 2017 son múltiples, voy a focalizar el análisis en la situación del endeudamiento que el actual presupuesto propone profundizar para el próximo año. En ese sentido, he presentado un proyecto de ley que busca fijar límites al endeudamiento del Estado, a fin de contribuir a una administración más eficiente del sistema de crédito público.

La Constitución Nacional, en el artículo 75, en los incisos 4 y 7 establece que es facultad del Congreso Nacional contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior de ésta.

Una parte importante de la deuda pública fue contraída durante gobiernos en los que el Congreso Nacional no funcionaba. Desde mediados de la década del 70, nuestro país comenzó un ciclo de endeudamiento internacional que finalizó con la crisis de 2001. Previo al colapso que significó entrar en default, tanto público como privado, nuestro país atravesó distintos procesos de reestructuración: planes Baker, Brady, blindaje y megacanje. En lugar de aligerar la deuda de las arcas públicas, aumentaba la presión sobre ellas..

En 2002, la deuda en moneda extranjera representaba más del 140 por ciento del PBI. Durante la última década, nuestro país realizó un importante proceso de reestructuración de la deuda externa, que según datos del FMI determinaron que la Argentina experimentó una reducción del 73 por ciento de su deuda respecto al PIB (Producto Bruto Interno). Resultó ser el país con mayor desendeudamiento en todo el mundo, destacándose además el ritmo de crecimiento del producto bruto interno.

Advierto con gran preocupación que el total de la deuda emitida en 2016 y registrada en el Boletín Oficial, supera los 50.000 millones de dólares -49.558.471.531,91 dólares, 2.500 millones de euros y 321.276.425.420 pesos, según el cálculo de la Agencia DyN, de la cual una buena parte es externa. Esto, sumado a los 30.000 millones de dólares que contempla el presupuesto 2017, implica una situación de escalada del endeudamiento que genera incógnitas y dudas sobre el futuro y la sustentabilidad del país.

Con el objeto de evitar que nuestro país vuelva a situaciones similares de crisis, como las mencionadas precedentemente, es fundamental contar con criterios que pongan un marco al endeudamiento externo que permitan no solo su repago, sino simultáneamente el crecimiento del país y el desarrollo de sus habitantes. Es necesario que la previsibilidad de pago sea decreciente en el largo plazo, donde el presidente que suceda a otro se encuentre con un perfil de deuda mejor del que recibió, como ha sucedido en la última década. Los controles al endeudamiento que han adoptado los países es una muestra de conciencia para fomentar un manejo responsable del endeudamiento para minimizar los efectos económicos adversos. Esta iniciativa busca modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal 25.917, en su artículo 21, para reducir la relación deuda pública total y el producto bruto interno hasta alcanzar el 30 por ciento del mismo. Esta relación se ubicaba en el 38 por ciento a fines de 2015. Una vez conseguido este nivel de endeudamiento público, no podrá superar este límite.

A su vez, la relación de la deuda externa respecto al producto bruto interno que se encontraba en el 27 por ciento, deberá reducirse hasta alcanzar el 20 por ciento del mismo. De la misma forma, una vez logrado el 20 por ciento, no deberá superar este



Dirección de Información Parlamentaria

límite. Además, promueve la necesaria participación del Congreso Nacional en temas de deuda pública cuya orientación y gestión son asuntos estratégicos para el desarrollo armónico del país.

Nuestro compromiso consiste en promover el desarrollo integral en los aspectos económico, social y cultural de todos los argentinos con inclusión, justicia social, independencia económica y soberanía política.

7. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CAROL

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

Me permito dirigir la palabra ante esta honorable asamblea ante la imperiosa demanda de la sociedad que nos interpela en nuestros distritos, ante la inminente aprobación del presupuesto nacional 2017, que en principio presenta un retroceso en algunos recortes que ya hemos vivenciado en años anteriores y difícilmente se puedan borrar de la sociedad las consecuencias que estas políticas neoliberales han generado.

En primer término, quiero mencionar que el proyecto que presentó el oficialismo y que fue modificado no ha cambiado su sustancia sino que se han visto modificadas algunas cuestiones, pero los elementos centrales que fueron cuestionados desde nuestro bloque no han sido modificados. Es por eso que mi voto a este presupuesto no va a acompañar la propuesta del proyecto del Ejecutivo.

No voy a acompañar este proyecto porque, de acuerdo con este plan de gobierno que se está planteando mediante este presupuesto, podemos afirmar cuáles van a ser las políticas que este gobierno pretende implementar, aunque en sus discursos los diferentes representantes del oficialismo nos digan otra cosa.

Quiero decir que la orientación económica que plantea este presupuesto para la República Argentina va en una dirección absolutamente opuesta a todas las promesas de campaña que realizó todo el equipo de esta coalición política con las diferentes fuerzas que la componen.

Si empezamos a hablar de realidad, esta realidad se contrapone en todos los ámbitos con los números que este mismo gobierno nos brinda semana a semana, a través de las bajas de consumo, la suba de la inflación, la caída de la producción. Todos estos nombres, datos y números están hablando de lo que este gobierno está haciendo con los argentinos desde el 10 de diciembre de 2015, con los sueños de los argentinos que pensaron que sería un cambio, un cambio que mejoraría las cosas que estaban encauzadas y encaminadas, que mejoraría las condiciones de los asalariados, los trabajadores, las pymes. Nos decían que lo que la gente quería seguir manteniendo del gobierno anterior como políticas públicas lo iban a seguir sosteniendo. Pero no fue así; los datos y las estadísticas lo demuestran, a pesar de que el presidente pidió que se lo evalúe dos meses atrás, porque parecería ser que antes no estuvo gobernando, que sólo fue un transcurrir de los días sin gobierno.

Las decisiones que han venido tomando nos hablan de un deterioro del país y de nuestro



Dirección de Información Parlamentaria

pueblo que no tiene precedentes; o sí los tiene, porque tenemos varias crisis económicas que hemos pasado detrás de estas políticas neoliberales que en todas las ocasiones en este país han generado, hambre, miseria, desocupación, endeudamiento y empobrecimiento del país de punta a punta, y que nos dejó en el 2001 una crisis económica que devastó nuestras economías regionales.

Por eso, es necesario remarcar que con las condiciones que está llevando adelante esta economía neoliberal, el PBI cayó y no subió como decían los gurúes de la economía y hasta el mismo presidente; los privados dicen que tenemos aproximadamente una caída del PBI para este 2016 del 1,8. Esto significa que nos está saliendo todo mal con estas recetas, que el año 2017 no nos presenta un mejor presupuesto y condiciones para nuestra economía.

La inflación que estimaban para este año, y con la cual los gremios negociaron las paritarias con este gobierno, era aproximadamente del 20 por ciento, pero llegamos al 40 por ciento y no quieren reabrir las paritarias, porque saben que esto es continuo. Es una caída continua de la calidad del salario, del poder adquisitivo de toda la población. Es impresionante lo que han hecho: llevaron una economía en marcha a la inflación, agrandaron el déficit, redujeron los salarios con la inflación y la devaluación, y ahora nos están pidiendo que acompañemos un proyecto que quiere acentuar las condiciones de desigualdad, acrecentar la pobreza, generar más deuda y recortar en salud, educación y seguridad.

Este presupuesto que están queriendo que votemos hoy en el recinto nos presenta un plan recesivo para toda la Argentina, y no quiero ser partícipe del hundimiento de la economía argentina, situación que además ya conocemos los argentinos porque este país ya pasó por este proceso de políticas neoliberales, que vienen con la receta de ajustar, bajar salarios, bajar costos, con la excusa de ser competitivos. ¿Competitivos para quiénes? ¿A quiénes les vamos a vender nuestros productos si están arruinando las economías regionales, si la caída del consumo destruye a las pymes, a las empresas familiares que durante estos últimos doce años encontraron en el gobierno anterior un plafón que presentó condiciones económicas de crecimiento, desarrollo y respeto por el trabajo de cada uno de los argentinos?

Me veo en la obligación de hacer hincapié, como docente que fui y que soy, porque uno nunca deja de serlo, en que un presupuesto que recorta sus partidas para ciencia y tecnología no puede tener indicios de crecimiento, de desarrollo y de futuro. Digo esto porque en el presupuesto del año 2017 estamos cercenando los recursos adjudicados a la ciencia y la tecnología.

Quiero recordar que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 19, dice: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.”

Paso a referirme al sobreendeudamiento. Cuando Macri recibe el gobierno, la deuda que el país tenía con los privados era de 43.000 millones de dólares. ¿Y qué hicieron durante este gobierno? La duplicaron: a casi un año de asumir, llevaron la deuda a 90.000 millones de dólares. Esta deuda, con los privados y en moneda extranjera, es la que históricamente nos llevó al default; es la deuda que en el 2001 dejó un país prendido fuego, el Ministerio de Trabajo tomado y una gran cantidad de desocupados y pobreza

infernol.

Pero lo peor que nos dejó ese 2001 no fue sólo esto. Nos dejó una sociedad que no cree en los políticos, que pensaba que los políticos se tenían que ir todos. Nos dejó una política que sólo le mostraba a la sociedad hambre y corrupción. Nos dejó una sociedad harta de la clase política. Nos costó doce años levantar el país y dejarle a Macri ese país que recibió en el 2015, sin conflictos sociales, con un índice de inflación y de pobreza que habían sido reducidos de manera de tener una sociedad un poco más justa, con un poco más de calidad del trabajo y del salario. Eso se llama respeto a la sociedad y a los valores que acunamos en nuestro seno quienes formamos parte del FPV, y tenemos el orgullo de decir que durante estos doce años construimos nación, construimos país, construimos una identidad colectiva y ejercitamos derechos que teníamos dormidos. Por eso, no puedo apoyar este presupuesto, que no sólo está endeudando nuestros próximos años sino el futuro

8. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CASTAGNETO



Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

Haré algunas consideraciones sobre cómo entiendo este proyecto de presupuesto 2017. En primer lugar, no nos oponemos a tener una mirada optimista sobre los hechos de la realidad, pero las proyecciones que encontramos en este presupuesto exceden creo yo un optimismo basado en el análisis de los hechos. Mientras que el gobierno reconoció que la economía cayó 1.5 por ciento en términos reales en 2016, proyecta un 2017 con un crecimiento del 3.5 por ciento.

Lo mismo sucede con la inflación: mientras que en 2016 la inflación, a fuerza de devaluación y tarifazo, cerrará por encima de los 40 puntos, para 2017 proyectan una inflación del 17 por ciento. No se pueden bajar 23 puntos de inflación en un solo año si no es a fuerza de un violento enfriamiento de la economía, con sus tremendas consecuencias para toda la población.

Otro de los pilares sobre los que se sostiene este presupuesto es el aumento de la deuda pública en cifras desconocidas para la historia argentina: 25.000 millones de dólares en un año para el 2017, es decir, alrededor de un 70 por ciento de las reservas actuales. Nos



Dirección de Información Parlamentaria

preocupa que el 80 por ciento de esa deuda vaya a financiar el desequilibrio fiscal corriente y no nuevas obras de infraestructura.

Si sumamos los 25.000 millones calculados para 2017 más los 90.000 millones de dólares que se tomarán en este 2016, según algunas estimaciones, nos encontraremos con que el gobierno ha tomado en sus primeros dos años de gestión unos 115.000 millones de dólares de deuda.

A esto hay que sumarle que a través de la ley de reparación histórica se autoriza la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Así se está vaciando el Estado, realidad que ya conocimos en los 90.

Este presupuesto conlleva un modelo de fuerte recorte de subsidios a las empresas públicas, como el caso de Aerolíneas Argentinas, desfinanciándola en 1.300 millones de pesos.

Mientras se la deslegitima, calculando la cantidad de jardines que podrían construirse si se le retirara el subsidio a la empresa de bandera del Estado, se destinan más de 6.000 millones de pesos al voto electrónico, y ello sin tener en cuenta la compra de las máquinas. Este es un tema que el gobierno ha impuesto forzosamente en la agenda de los ciudadanos. Se impone entonces una política de ajuste fiscal basada en quita de subsidios, reducción de personal y extranjerización del mercado aerocomercial de cabotaje, ya implementada durante el año 2016 y que se afianzará durante el año próximo.

Asimismo, se eliminan programas que brindaban el acceso de la ciudadanía a bienes culturales, como “Conectar Igualdad” y “Fútbol para Todos”, mientras se destinan 100 millones de pesos para la construcción de la nueva sede de la TV Pública.

Hasta acá podrían decir que son todas cuestiones generales. Pero recorriendo la provincia de Buenos Aires puedo afirmar que este presupuesto no tiene en cuenta la realidad de la gente.

Puedo hablar del caso de la Cooperativa Cotravel, dedicada a la producción de velas de Punta Indio, que tuvo que cerrar sus puertas por no poder solventar los costos de la luz y el gas a raíz del tarifazo. Este presupuesto, al terminar con los subsidios, termina con las pequeñas empresas y las cooperativas.

O también puedo hablar sobre el proyecto de ley de electrodependientes, de mi autoría, que ya tiene dictamen por unanimidad de las comisiones de Discapacidad y de Salud y Acción Social y se encuentra frenado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Para aquellos que no lo saben, este proyecto garantiza el derecho a la salud de aquellas personas cuya vida depende del servicio eléctrico, asegurando, entre otros, la gratuidad del servicio. Para ellos, la electricidad es como el aire que respiramos.

Mientras tanto, se están priorizando proyectos que solo benefician a las empresas y a los sectores concentrados, como el que hemos tratado sobre los contratos público-privados. También podemos nombrar el nuevo aumento del subte, que desde el lunes pasó a valer 7,50 pesos. Desde que Cambiemos se hizo cargo del gobierno, este medio de transporte aumentó más del 70 por ciento.

A la luz de todos estos casos, me pregunto dónde está la sensibilidad de este proyecto. Creemos que este presupuesto consolida un modelo basado en la disminución del poder adquisitivo de los sectores populares, la baja generalizada del consumo y el

Dirección de Información Parlamentaria

endeudamiento. Nuestro pueblo necesita más de sus gobernantes y no que le sigan ajustando el bolsillo a todos los argentinos.

Por eso, llamamos a construir un presupuesto que realmente esté orientado a mejorar la calidad de vida de la gente y que no repita la vieja historia en la que el endeudamiento externo pretendió sepultar la soberanía del pueblo argentino.

9. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CIAMPINI

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

El presupuesto de un Estado expresa sin lugar a dudas una intencionalidad política, que no solo se ve en el programa económico implementado sino además, y sobre todo, en los sectores socioeconómicos que se ven favorecidos y en los que se ven desfavorecidos.

El actual gobierno habla de una política de desarrollo, pero en el presupuesto se privilegia claramente a los sectores agrícolas concentrados, que históricamente tuvieron ventajas comparativas en la economía argentina, y no se hace referencia a ningún proyecto o política específica dirigida a la promoción del sector industrial.

Se trata de un claro modelo de reprimarización de la estructura económica, que se verifica además en el recorte presupuestario que el gobierno nacional plantea en el área de ciencia y tecnología, que en 2017 pasará del 0,71 por ciento del total del país al 0,59 por ciento. Es decir que hay una reducción del 20 por ciento.

En lo que respecta a educación, el gobierno presentó una nueva política de evaluaciones que teóricamente busca “mejorar la calidad educativa” a través de la implementación de medidas de mercado en la educación. Sin embargo, el presupuesto destinado a Educación y Cultura para 2017 representa el 6,78 por ciento del presupuesto total del país, el más bajo para el área desde 2010, muy por debajo del aumento global del presupuesto, que es del 22 por ciento, y de la inflación que se contempla.

Por otro lado, el presupuesto predice un crecimiento de la economía cercano al 3,5 por ciento para 2017, cuando la caída de este año será cercana al 1,5 por ciento. ¿En qué se basa la previsión de crecimiento, entonces? En las “inversiones”, que nunca llegan, y en “la eliminación de las distorsiones que afectaban la eficiente asignación de recursos productivos que redundan en una mejora de la capacidad productiva de la economía”, es decir, el corrimiento del Estado y la liberalización de la economía.

Otro de los puntos centrales es el déficit fiscal. Mientras basaron toda la campaña en el cuestionamiento al déficit fiscal del último mandato de Cristina Fernández de Kirchner, las exportaciones y el PBI per cápita, presentaron un presupuesto que supone una dinámica deficitaria en la balanza comercial 4,2 por ciento del PBI y que prevé que para 2019 se incrementará aproximadamente cinco veces respecto de este año.

Otra de las grandes mentiras viene por el lado de la recaudación tributaria. Mientras el



Dirección de Información Parlamentaria

presidente Macri prometió durante la campaña eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores, en la realidad se profundizó la estructura regresiva: se incrementó la cantidad de trabajadores que pagan ganancias, así como la participación del IVA, y se redujo la alícuota del impuesto a los bienes personales y se eliminaron las retenciones a las exportaciones del campo.

Acerca de la deuda, si tomamos lo ejecutado en 2016 y el presupuesto de 2017, se prevé el incremento en 50.000 millones de dólares netos, es decir que pasará del 49,6 por ciento del PBI a un 56 por ciento del PBI. Además, al ser tres cuartas partes de la deuda en moneda extranjera, se expone a la Argentina a la inestabilidad financiera y la recesión económica internacionales. Lo más grave del asunto es que la toma de deuda no se dirige a infraestructura ni al fomento de la actividad económica sino a financiar las transferencias de recursos.

En ese sentido, hablan de “Pobreza cero” y en el gasto se prioriza el pago de los intereses de la deuda por sobre el de servicios sociales. Los intereses de deuda pública significan el 10 por ciento del total del gasto proyectado para 2017: 2,53 por ciento del PIB. Esto sumado a la brutal política de reducción de los subsidios a los servicios públicos, que se traduce en un tarifazo, la pérdida del poder adquisitivo y un ajuste en el consumo de los ciudadanos.

¿Quiénes son los beneficiados, entonces? Los fondos buitres, el Club de París y otros especuladores que recibirán 247.632 millones de pesos, o 14.000 millones de dólares al tipo de cambio de 18 pesos por dólar que prevé el presupuesto para 2017.

Por todo lo expuesto, no acompañaré con mi voto este presupuesto para el año 2017.

10. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CICILIANI

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

El debate parlamentario del Presupuesto 2017 constituye un avance respecto de los últimos años en los que el entonces oficialismo se negaba a aceptar cualquier tipo de modificaciones o agregados. A su vez, también queremos resaltar como hecho positivo que las estimaciones de gastos resultan más realistas, por no haberse subestimado los recursos. Asimismo, consideramos auspicioso que en el actual contexto económico no se haya incurrido en un menor gasto en pos de reducir el déficit, evitando de esta forma amplificar los efectos de la recesión.

Observamos, sin embargo, que los niveles inflacionarios previstos son difícilmente alcanzables, con lo que habrá de producirse una pérdida del valor adquisitivo de las remuneraciones.

También nos resulta preocupante el sesgo que adquiere el gasto en inversión pública, en el que se evidencia un alza significativa en transporte, infraestructura vial y energía, pero a costa de no invertir lo necesario en el mejoramiento de la infraestructura social básica, como ser vivienda, agua potable y alcantarillado, centros de salud, etcétera.

Como no se ha previsto un cambio en la política tributaria, serán los asalariados y



Dirección de Información Parlamentaria

demás sectores de escasos recursos quienes deberán afrontar –con sus privaciones- las necesarias obras para el mejoramiento de la infraestructura básica.

Disentimos enérgicamente con la distribución geográfica de las obras públicas previstas, ya que se autorizan iniciativas de altísimo costo para la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, como la Estación Central Obelisco, el soterramiento del Sarmiento y la Red de Expresos Regionales, que tienden a acentuar el desbalance territorial argentino.

En especial, manifestamos nuestras diferencias en cuestiones trascendentes, como la salud y el hábitat, así como también en otros puntos que procederé a desarrollar.

Así, en materia del salud, desde el Partido Socialista analizamos con preocupación el anuncio y paulatina implementación de la Cobertura Universal de Salud. Este sistema de aseguramiento no ha tenido los resultados esperados en las experiencias latinoamericanas y ha provocado mayor desigualdad, más corrupción y, sobretudo, el debilitamiento de la salud pública frente al fortalecimiento de los servicios privados. Coincidimos en el diagnóstico respecto al alto grado de segmentación del sistema de salud argentino, tanto en su financiamiento como en el tipo de aseguramiento, el acceso y calidad de los servicios, encontrándose fuertes desigualdades a lo largo del país. La abrumadora mayoría de los fondos públicos del sector provienen de las provincias y algunos municipios. Cada jurisdicción gestiona, como puede y con mucho esfuerzo, sus propios recursos de salud. A ello se le agrega un sistema de seguridad social muy atomizado –se estima en más de 300 fondos de gerenciamiento y atención de la salud- en donde conviven obras sociales e instituciones de seguridad social provinciales y nacionales y el PAMI. Todo ello afecta negativamente el acceso y la calidad del servicio de salud brindado a la ciudadanía, especialmente a aquellos sectores más vulnerables cuya única opción es el sistema público. Esos mismos ciudadanos a los cuales se les brindaría el “beneficio” del CUS.

Coincidimos también en la necesidad de que el Estado implemente políticas para expandir y mejorar la oferta en salud para los sectores de menores ingresos.

Coincidimos en la necesidad de jerarquizar el Consejo Federal de Salud, como espacio fundamental para que las provincias identifiquen ejes comunes y generen acuerdos regionales y luego nacionales. Pero para avanzar en un nuevo modelo de salud nacional, debemos empezar por las provincias. Hace casi diez años Santa Fe puso en marcha un plan de salud pública provincial, centrado en fortalecer y expandir la oferta de los servicios de salud pública en todo el territorio santafesino para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la salud. Eso se hizo y se está haciendo a través de una fuerte inversión en la oferta de salud pública tanto en infraestructura construcción y modernización de hospitales y centros de atención primaria como en sus recursos humanos, fortaleciendo las acciones en el campo de la prevención de las enfermedades. Por eso, desde nuestra experiencia y visión, advertimos con preocupación el enfoque desde el cual el Ministerio de Salud de la Nación ha diseñado el CUS. No creemos que el reencauzamiento del sistema sanitario nacional ocurra a través del financiamiento de la demanda vía el CUS. La novedad de esta propuesta es que el “acceso a la salud” al que hace referencia es el de los no contribuyentes al sistema privado de salud, llevando a la progresiva mercantilización de la medicina pública.

Tanto Colombia como Chile, países con más de quince años de esquemas similares de aseguramiento segmentado, presentan en la actualidad agudas crisis sanitarias. Si bien



Dirección de Información Parlamentaria

se reconoce el aumento del acceso a servicios de salud por parte de poblaciones otrora excluidas, al mismo tiempo se observa una disminución de las prestaciones para las personas de menores ingresos. Asimismo, el sistema se volvió más asistencial que preventivo -con el progresivo retiro del Estado de las tareas de difusión, promoción y prevención-, resultando todo ello en un aumento de la inequidad, en un contexto, como ya se ha mencionado, de debilitamiento de la salud pública.

Por otro lado, yendo a los aspectos particulares de la iniciativa, la nominalización de la historia clínica con el microchip se presenta como algo nuevo, cuando en realidad -con distintos niveles de avance según las provincias- ya se está realizando. En Santa Fe, en el marco del Plan Estratégico de Tecnología Tecnofe desde este año comenzó a implementarse paulatinamente la informatización de los servicios en los hospitales, la incorporación de la historia clínica digital y la receta electrónica. En aquellos hospitales con capacidad en la actualidad para brindar este servicio, la historia clínica se va armando con todos los datos del paciente, con sus tratamientos y los diferentes episodios que van ocurriendo dentro de cada efector. Esto posibilitará que desde cualquier centro de atención primaria se puedan consultar los laboratorios que hizo el paciente en un hospital, las imágenes ecografías, radiografías, etcétera- de los diferentes estudios realizados.

Respecto al financiamiento, tal como indica el DNU 908/2016, los fondos mayoritarios para la puesta en funcionamiento del CUS son de carácter excepcional y constituyen saldos acumulados en el fondo solidario de redistribución. Por lo tanto, ¿cómo se garantiza a futuro su funcionamiento? ¿Qué rol cumplirán las provincias y los municipios? ¿Esto implica mayor endeudamiento con los organismos multilaterales de crédito? ¿Cuáles son las condiciones que han impuesto para otorgar el financiamiento internacional?

Nosotros creemos que un modelo de salud pública debe ser concebido como un conjunto de políticas cohesionadas en un todo, que forme parte de una planificación y de una transformación integral del Estado, que debe actuar por oferta y no por demanda. El Estado tiene la obligación de garantizar la salud universal, gratuita e integral de todos sus habitantes, entendiendo que debe reconocer ese servicio como un derecho humano inalienable.

En lugar de poner al Estado y a los efectores públicos para dar respuestas a los ciudadanos que no tienen obra social, el modelo propuesto por el Gobierno permite optar entre el hospital público o la clínica privada, financiando en consecuencia al sector privado. Asimismo, favoreciendo al sistema privado de salud se corre el foco desde la prevención a la curación, dado que las acciones de prevención no resultan lucrativas y, por lo tanto, incompatibles con el modelo de negocio.

De esta forma, la provisión de la salud pasa a operar en una lógica de mercado y, con ello, la oportunidad no es para el desarrollo del sistema público, ni para la accesibilidad de la ciudadanía a la salud, sino que es una gran oportunidad de negocio para el sistema privado de salud.

En síntesis, resulta necesario evitar que el sector privado tome paulatinamente el control de la asignación y distribución de los recursos de la salud en nuestro país.

Ya lo hemos padecido: la mano invisible concentra en los sectores de mayores ingresos e invisibiliza a los sectores más pobres. No queremos volver a vivir las recetas fallidas del derrame, que lo único que derramaron fue más pobreza y más desigualdad.

Dirección de Información Parlamentaria

En relación con el hábitat y la vivienda, el programa “Habitat Nación” que se ejecuta dentro del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda tiene un escaso presupuesto para la enorme cantidad de obras que deberían encararse en este y en los próximos años. De acuerdo con los números propuestos por el PEN, para el ejercicio 2017 se presupuestaron obras por \$7.348 millones, lo que implica una cobertura para apenas 60 mil familias, una proporción pequeña de la población objetivo.

Según el reciente informe presentado por TECHO, aproximadamente el 10 por ciento de los argentinos vive en asentamientos informales o en villas. La prestigiosa ONG relevó 2.432 asentamientos informales en los que viven 650.000 familias o 3 millones de personas.

Las villas y los asentamientos son el lugar con mayor desigualdad en nuestro país. En la casi totalidad de estos asentamientos informales 95 por ciento-, las familias que los habitan no cuentan con conexión formal a la red de agua corriente. Aún mayor 98 por ciento- es el índice de hogares sin conexión a una red cloacal construida exclusivamente para la evacuación de las aguas residuales. A su vez, 7 de cada 10 de este tipo de hábitat carecen de conexión formal a la red de energía eléctrica.

Presupuestar obras para la atención de sólo 60.000 familias, dejando de lado las necesidades de más del 90 por ciento de los que allí viven demuestra que, para el actual gobierno, las prioridades no pasan por eliminar la desigualdad social y económica. El aumento de la pobreza y de la indigencia del que ha dado cuenta el Observatorio de la Deuda Social seguramente habrá de incrementar la población en estos asentamientos irregulares, con lo que el cuadro descripto no sólo no habrá de mejorar sino que tenderá a agravarse.

Debemos consensuar políticas públicas a través de los tres niveles de gobierno, que posibiliten que estos 3 millones de compatriotas accedan no sólo a la atención primaria de su salud, sino a los demás servicios que –de acuerdo con el avance de nuestra sociedad- les permita acceder a crecientes niveles de educación y acceso a un trabajo digno.

La creciente brecha social entre los que tienen y los que no tienen está provocando no sólo problemas de seguridad, sino también en el desarrollo de la economía. De acuerdo con un estudio de una conocida consultora laboral, el 59 por ciento de las empresas ha tenido problemas para cubrir cargos debido a la falta de talentos. Esta problemática habrá de incrementarse año a año en la medida que no atendamos la situación de esta gran parte de la población argentina que nace, vive y muere sin acceso a salud, educación y vivienda dignas.

Por ello es que solicitamos que se prioricen las acciones de mejoramiento integral de los barrios que tienen como objetivo universalizar y mejorar el acceso al hábitat en las villas y asentamientos irregulares, y en las localidades más vulnerables de todo el país, a través de la inversión en obras de infraestructura básica agua y saneamiento, vehicular y peatonal, espacio público, equipamiento comunitario y mejoramiento de la vivienda. En lo que respecta a la deuda externa, en este Presupuesto se prevé una importantísima toma de deuda pública, mayoritariamente externa, para solventar el déficit fiscal que se ha presupuestado.

Los altos niveles de inflación, la caída de los indicadores de actividad industrial y la disminución del producto bruto nacional esperada para el próximo ejercicio constituyen un serio problema macroeconómico que nos coloca nuevamente frente al problema de la



Dirección de Información Parlamentaria

sostenibilidad de la deuda externa.

Los 44.000 millones de pesos que se tomarán en el 2017 carecen, hasta ahora, de control por parte del Congreso Nacional. Debemos recordar que la manda constitucional establecida en el artículo 75, inciso 7) dispone expresamente: “Corresponde al Congreso: Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.”

Por ello hemos venido requiriendo a este cuerpo la constitución de una Comisión Bicameral de la Deuda Externa que tenga como funciones la de controlar o supervisar las contrataciones de empréstitos públicos, así como también la facultad de aprobarlos o desecharlos.

Nuestro partido viene reclamando la constitución de esa Bicameral desde 1994, cuando el diputado Alfredo Bravo presentó un proyecto bajo el número de expediente 3951-D-1994 para que el Congreso Nacional se abocara entre otros puntos- a supervisar y recomendar la aprobación o deshecho de las negociaciones que el PEN realice con el fin de contraer empréstitos de dinero sobre el crédito de la Nación; supervisar y recomendar la aprobación o deshecho de las tramitaciones que realice el PEN con el fin de arreglar el pago de la Deuda Externa de la Nación; analizar las previsiones que en referencia a la deuda Externa se contemplen en el proyecto de presupuesto anual de gastos de administración de la Nación aprobado por el PEN y recomendar su aprobación modificación o rechazo.

Similares proyectos fueron presentados posteriormente por todos nuestros legisladores, a través de los diputados Polino, Barbagelata, Binner, Zabalza y el senador Giustiniani. Recién con la ley 27.246 de fines del año pasado –y por expreso pedido nuestro- se creó una Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación cuyo conformación aún está pendiente.

Nuevamente el Congreso Nacional va a aprobar un presupuesto de gastos y recursos y a facultar al Ejecutivo para que lo modifique, ya sea por la vía del artículo 37 -con las ínfimas limitaciones que se incorporarán- o a través de los DNU que siguen siendo utilizados por el actual Ejecutivo a pesar del compromiso de acrecentar la baja institucionalidad recibida del anterior gobierno.

En los últimos períodos parlamentarios se han creado varias Comisiones Bicamerales con diversos objetivos, la mayoría de ellas directamente no están conformadas o, si lo están, no funcionan adecuadamente.

Insistimos en la conformación de la Bicameral de la Deuda Externa puesto que su funcionamiento permitirá no sólo que el pueblo de la Nación pueda controlar sino, y sobre todo, que los poderes del Estado se comprometan efectivamente en la búsqueda de las mejores soluciones para el funcionamiento de la economía.

En materia de políticas de fomento para la agroecología y la agricultura familiar, el Presupuesto en análisis carece de ellas, a pesar de que son las que generan empleos en los territorios, alimentos saludables para toda la población, el buen uso de la tierra urbana y periurbana y la protección de la población ante el uso incorrecto de agroquímicos.

Vemos que, mediante el artículo 71, se otorga un subsidio de 1.000 millones de pesos para la producción de soja para subsidiar fletes provenientes de las provincias incluidas en el Plan Belgrano. Este incentivo habrá de generar una mayor primarización de la economía.

Estimamos necesario generar las condiciones económicas para el desarrollo de un



Dirección de Información Parlamentaria

modelo de producción sustentable que garantice el acceso a los alimentos sanos y de calidad para la población, fomentando las economías regionales y el desarrollo local. Debemos generar incentivos para dejar de ser sólo el granero del mundo, tenemos que promover actividades que promuevan agregar valor a la producción primaria. Por ello es que requerimos que se incluyan en el Presupuesto 2017 políticas concretas de financiamiento y/o subsidios a la agroecología y a la agricultura familiar. Por último, en lo que hace a la perspectiva de género en el análisis presupuestario, consideramos necesario que se concrete la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, a fin de que desde allí se promueva la incorporación de la perspectiva de género en la asignación de los recursos presupuestarios. Desde nuestra óptica estimamos ineludible incluir la perspectiva de género en el proceso presupuestario. Con frecuencia se asume que el presupuesto es neutral desde el punto de vista del género. Sin embargo, ocurre que al no tomar en cuenta los diferentes roles, capacidades y necesidades de mujeres y hombres, niños y niñas, los presupuestos pueden reforzar las desigualdades existentes. Hacemos propias las consideraciones del Manual para Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria que sostiene: “Analizar el presupuesto desde una perspectiva de género nos proporciona un mecanismo útil para evaluar los efectos de las políticas gubernamentales en hombres y mujeres, niños y niñas, y descubrir su verdadero impacto sobre todas las personas que integran la economía. De esta manera, el gobierno puede evolucionar e instrumentar políticas que garanticen la equidad”.

11. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA DURÉ

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

Demás está decir que estamos discutiendo la aprobación de una de las principales herramientas que tiene el Estado, porque determina los planes de gobierno y la asignación de recursos para cumplir con sus objetivos.

Hablamos quizás de la norma más significativa que nos toca analizar todos los años, porque en ella se fijan los lineamientos políticos, económicos, tributarios y de distribución del ingreso a lo largo y ancho de todo el territorio argentino.

Para los formoseños en general, y para ésta formoseña en particular, es importante el tratamiento y aprobación de esta iniciativa.

Para quien les habla, porque es la primera vez que por voluntad de mis comprovincianos tengo la posibilidad de ocupar esta banca, es importante poner de manifiesto la imperiosa necesidad de la prosecución del desarrollo de mi provincia.

Para mi provincia, si las letras y números que hoy estamos votando se convierten en una realidad concreta, no caben dudas que la vida de los formoseños, y de todos los argentinos, mejorará a partir de lo que consideramos como una justa y equitativa



Dirección de Información Parlamentaria

distribución de los ingresos de las arcas públicas nacionales dentro de nuestro sistema federal.

En ese sentido, cabe reconocerle al gobierno su permeabilidad al debate, ya que durante el último mes hemos tenido la oportunidad de escuchar y consultar a los distintos ministros sobre los temas vinculados con sus carteras y la voluntad de contemplar los acuerdos incorporando todas las modificaciones relativas a obras para mi provincia, desde donde vamos a hacer todo el esfuerzo que sea necesario para que las partidas presupuestarias lleguen conforme el compromiso asumido por el gobierno nacional. Además, vemos con profunda satisfacción el rescate de los valores republicanos, consagrados en el artículo 1° de nuestra Carta Magna, que se realiza modificándose el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que faculta al jefe de Gabinete a reasignar las partidas presupuestarias sin aval del congreso. Aunque ésta se proponga de manera progresiva, manifestamos nuestro beneplácito por dar inicio a la supresión paulatina de los denominados superpoderes.

Asimismo, celebramos la intención política, expresada por el diputado Laspina, de crear la Oficina de Técnica y Presupuesto del Congreso, que nos permitirá tener acceso a información fidedigna y precisa de los ingresos y de las cuentas públicas. Esperamos que se apruebe la iniciativa lo más pronto posible.

No nos olvidemos de que aún estamos esperando la conformación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa y es muy importante cumplir con los compromisos asumidos.

Mucha gente votó al actual gobierno nacional buscando un cambio que genere un desarrollo más inclusivo. En este sentido, me parece importante señalar que si el modelo económico por el que se opta es el de la liberalización sin normas claras, va a tener un impacto nocivo sobre las economías regionales.

Por otro lado, no quiero dejar de mencionar y expresar mi preocupación en relación con las partidas que autorizan la toma de deuda pública, sobre su aplicación, control y amortización. Tengamos todos presente que estamos condicionando el futuro de nuestros hijos. Usemos el endeudamiento para dejarles un país mejor y no un problema futuro, por el que ellos deban responder. Es menester un control de aplicación; no la usemos para fines electorales y financiar gastos corrientes; no volvamos a cometer ese error. Por eso pido seriedad y responsabilidad al Poder Ejecutivo y objetividad y compromiso a todas y todos mis compañeras y compañeros para su adecuado control, para el bienestar presente y futuro de todos los argentinos.

Como reflexión final me gustaría reforzar la idea de que es el Estado el que debe, a través de la inversión pública, perseguir resultados sociales favorables, satisfactorios y positivos, que no siempre son económicamente redituables, no así como las megaempresas que siempre han perseguido rentabilidad económica a cualquier precio y a cualquier costo. Nosotros oficialismo y oposición tenemos la obligación de legislar para buscar ese justo equilibrio, para nuestro mejor presente y para dejarles a las generaciones futuras un país habitable donde puedan vivir en paz, felices, con pleno goce de derechos y bienestar.

13. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ESTEVEZ



Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

El debate del presupuesto es el debate sobre el modelo social y económico que tiene un gobierno determinado. El presupuesto condensa las decisiones de un gobierno, sobre en qué gastar o invertir el dinero de los contribuyentes, es decir, el esfuerzo de todos los argentinos. Casualmente, el próximo 15 de noviembre se cumplirá un año de aquel debate entre los entonces candidatos Mauricio Macri y Daniel Scioli, que tuviera lugar en la Facultad de Derecho de la UBA de cara al ballottage. En este sentido, me parece importante contrastar las promesas que hiciera el candidato Macri con lo que ha sido la gestión del Presidente Macri, y con el proyecto de presupuesto que ha enviado a este Congreso. Este ejercicio de memoria es fundamental.

Lo cierto es que las acciones del presidente no se condicen con las promesas del candidato. Ni cerca. Por el contrario, el candidato mintió y el presidente traiciona cada día a sus votantes y a todo el Pueblo argentino con cada decisión gubernamental que toma. Los trabajadores y los jubilados tienen hoy más dificultades para llegar a fin de mes que hace 11 meses. Los jubilados han sido víctimas de una gran estafa vendida publicitariamente como una reparación histórica y el PAMI ha reducido la cantidad de medicamentos y servicios que presta gratuitamente a nuestros mayores. La preocupación sobre la salud de nuestros padres o abuelos de la que hablaba el candidato Macri es hoy un problema real como consecuencia de sus decisiones políticas.

La salud de los argentinos le importa tan poco al presidente, que en el presupuesto se prevén recortes sustanciales en áreas sensibles como los programas de asistencia sanitaria para la madre y el recién nacido, o de lucha contra el sida y las enfermedades de transmisión sexual, o de detección y tratamiento de enfermedades crónicas, o de prevención y control de enfermedades endémicas. Personalmente, he presentado proyectos requiriendo al Poder Ejecutivo que informe sobre faltantes de medicamentos e insumos para VIH que se venían registrando en todo el país. Desde el gobierno los negaban o minimizaban. Sin embargo, en el proyecto oficialista las metas de estudios de carga viral para VIH padecen una reducción del 5,1 por ciento. Esto es gravísimo, hablamos de la salud y la vida de los argentinos y, en particular, de los más humildes.

Los trabajadores han visto drásticamente reducida la capacidad adquisitiva de sus salarios como consecuencia de la política gubernamental basada en los despidos masivos más de 200 mil- para moderar los justos reclamos salariales, una inflación altísima que ya supera el 40 por ciento según todos los estudios, y una devaluación brutal del 60 por ciento como consecuencia de la salida del llamado “cepo”. Sin embargo, el candidato Macri prometía que no habría despidos y que se crearían 2 millones de empleos, que no habría devaluación y que bajaría rápidamente la inflación. Nada de esto sucedió. De la pobreza cero prometida pasaron a sumar 1,4 millones de nuevos pobres como consecuencia de estas políticas neoliberales. Esta tragedia social y escándalo moral va acompañada en el proyecto de presupuesto por un recorte en los recursos del Ministerio de Trabajo. Así se desarman también las herramientas que tienen los trabajadores para defender sus derechos. Por sólo dar un ejemplo, se prevé reducir un 18,8 por ciento la cantidad de seguros por capacitación y empleo.

Difícil reducir la inseguridad cuando se aumenta de esta manera la desigualdad social. Y



Dirección de Información Parlamentaria

menos aún si se recorta el presupuesto del Ministerio de Seguridad, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, tal como propone el proyecto oficialista. El candidato Macri también hablaba de la importancia de las universidades públicas y del desarrollo de la ciencia y tecnología. Sin embargo, el presupuesto actual prevé recortes salvajes en éstas áreas, lo que ha llevado a la comunidad universitaria y científica a movilizarse desde hace meses, para evitar que se frene el proceso de construcción de soberanía tecnológica que habíamos retomado en la última década y evitar así una nueva fuga de cerebros hacia los países centrales en busca de mejores oportunidades. Por sólo dar un ejemplo, el proyecto prevé una reducción del 25,8 por ciento de la cantidad de becas para estudiantes universitarios de bajos recursos. Esa es la verdadera cara de Mauricio Macri.

Sobre el gran plan de infraestructura destinado a la reparación histórica del Norte Argentino, vendido publicitariamente bajo el nombre de “Manuel Belgrano”, los gobernadores e intendentes no han visto a la fecha una sola obra construida en sus territorios. Para peor, las únicas obras que el ahora presidente Macri ha inaugurado hasta la fecha, se habían puesto en marcha durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin ir más lejos, las metas para 2017 en materia de infraestructura vial caen en varios ítems, tales como mantenimiento del sistema modular, obras de conservación mejoradora, mejoramiento y reconstrucción de puentes y obras de construcción en corredores viales concesionados.

A pesar de todas las promesas del candidato durante la campaña, este primer año de gestión y las previsiones para el año entrante del propio gobierno condensadas en este proyecto de presupuesto, nos muestran que la economía que había crecido en 2015, entró en recesión y seguirá contrayéndose, como resultado de la caída del consumo y la apertura indiscriminada de las importaciones. Esos datos, sumados al salvaje tarifazo como consecuencia de la quita de subsidios, pusieron a las pymes, a las economías regionales y al sector industrial al borde de la quiebra.

Mintió el candidato cuando dijo que no habría tarifazo y que no se eliminarían los subsidios, y mintió cuando dijo que protegería a las pymes y a las economías regionales. Los productores de leche y de fruta pueden dar fe de ello. También los obreros metalúrgicos y metalmecánicos, así como el sector turístico, porque la clase media ya no puede viajar al exterior; se reciben más turistas pero con un gasto promedio inferior al de los últimos años. La industria del calzado está en crisis. La construcción viene hace meses en caída. El país del presidente se derrumba, lejos de las promesas no cumplidas del candidato. Tan poco le interesa al presidente apoyar a las economías regionales y a los pequeños productores de agroalimentos, que el proyecto de presupuesto prevé recortes en el INTA por porcentajes similares a la inflación acumulada el último año.

Y ya ha empezado a instalar el propio presidente la privatización de Aerolíneas Argentinas al plantear la cantidad de jardines que podrían construirse con lo que el Estado Nacional destina a financiar el déficit de la empresa estatal. Poco importa la conectividad federal, o las promesas de no privatización de la aerolínea de bandera. Vinieron a entregar el patrimonio de los argentinos a las corporaciones foráneas. Vinieron a saquear el Estado que supimos construir.

¿Cuántos kilómetros de rutas y autopistas podrían construirse con las retenciones al agro y la minería que dejamos de percibir por decisión del presidente?



Dirección de Información Parlamentaria

¿Cuántas escuelas podrían construirse con los más de 50 mil millones de dólares por los que este gobierno se endeudó, entre otras cosas, para pagar a los fondos buitres?

¿Cuántos hospitales podrían construirse con los impuestos de toda la gaita que el presidente y sus funcionarios se llevaron a las cuevas fiscales de Panamá?

¿Cuántas pymes y puestos de trabajo podrían haberse salvado si el presidente no le hubiese entregado el gobierno a las grandes corporaciones para imponer tarifazos con el fin de aumentar aún más sus ganancias?

Este presupuesto es la prueba más fehaciente de que el candidato Macri mintió y el presidente Macri traicionó. Este presupuesto que jerarquiza el endeudamiento por sobre la inclusión es inmoral. Este presupuesto es el anuncio oficial de que el ajuste recién comienza y de que se vienen tiempos muy duros para todos los argentinos. Yo no estoy dispuesta a convalidar el sufrimiento del pueblo argentino para aumentar los márgenes de ganancias de los sectores concentrados y, menos todavía, para que la plata se la lleven los buitres.

Por eso, adelanto mi voto en contra del proyecto oficialista.

14. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA FRANA

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

Cuando se debate un presupuesto, se debate el rumbo político y económico de un país, y no coincidimos con lo planteado en este proyecto básicamente por tener una mirada diferente.

Siempre pensamos en acompañar este debate y así lo hicimos, ya que de ninguna manera íbamos a obstaculizar la posibilidad de que este gobierno contara con la ley de leyes, pero no vamos a dejar de expresar lo que consideramos son políticas que no habrán de beneficiar a nuestro país, de acuerdo con nuestra forma de ver el desarrollo y crecimiento de nuestra Nación.

Claramente estamos frente a dos visiones diferentes de la economía; por lo tanto, no vamos a ahondar en cuestiones de teoría económica ya que entraríamos en un debate académico que poco importa a la sociedad.

Seguramente coincidimos en reconocer que era necesario revisar un conjunto de políticas en el tema tarifario, inflación, economía informal, propuesta de cancelación y pago a “fondos buitres”, e impuesto a las ganancias sobre el salario, entre otras.

Lo que sí podemos hacer es ir espiando cuáles serán los sectores beneficiados y cuáles los perjudicados a través de la definición de país que el actual gobierno tiene. Esa definición se ha visto expuesta a partir de recorrer algunas de las medidas ya tomadas, que paso a destacar.

Devaluación del peso, pasando de 9,55 pesos igual a un dólar, a 15,50 pesos igual a un dólar, y su impacto en los precios, o lo que es lo mismo decir, el traslado a precios que se produjo, sean importados o no los productos.

Apertura de las importaciones a productos que se fabrican en el mercado interno, lo cual



Dirección de Información Parlamentaria

ha generado suspensiones de trabajadores, eliminación de horas extras y en el peor de los casos, el cierre de las fuentes de trabajo, por ejemplo, las fábricas de la línea de blanco en el Gran Rosario.

El “tarifazo” que, demorado o no, va a llegar al bolsillo de la población, sean familias, comercios, pymes o grandes empresas nacionales o transnacionales, y no hace falta aclarar a quién o quiénes de los mencionados les impacta peor.

Eliminación o disminución de retenciones, lo cual provocó la disminución de recursos en manos del gobierno nacional, y a su vez –sumado a la devaluación- el incremento de ciertos productos en el mercado interno, como maíz, trigo y los productos que se elaboran a partir de estos insumos, como carne de cerdo.

Aplicación de altas tasas de interés a los efectos de “succionar” a través de las LEBAC Letras del BCRA los pesos existentes en el mercado a los fines de evitar “corridas” detrás del dólar. Al momento de la discusión de este proyecto de presupuesto, las LEBAC igualaron la base monetaria del país. No hay duda de que el efecto bola de nieve tendrá un altísimo costo para nuestro país.

El déficit fiscal se ha visto incrementado en su monto y magnitud, el cual ha sido solventado a través del endeudamiento, que alcanza a la fecha la cifra de 46.000 millones de dólares, aumentando el stock de deuda en moneda extranjera en un 14 por ciento, la cual ha sido dirigida a cubrir los gastos corrientes del Estado como consecuencia de la baja de la recaudación, lo que provoca y provocará un aumento del peso de los servicios de la deuda sobre el total del gasto del Estado.

Podríamos hacer referencia a otras medidas, pero con solo mencionar estas podemos establecer que lo que sucedió inmediatamente fue una disparada de la inflación, una caída del consumo, paralización de la obra pública y privada, fuerte endeudamiento en moneda dura y, por consiguiente, la pérdida de puestos de trabajo.

El proyecto de presupuesto expresa la definición de qué país quiere un determinado gobierno y a partir de esta premisa establecer cuáles van a ser las herramientas o instrumentos de la técnica económica y financiera que se van a utilizar para lograr ese país.

Dicho esto, veamos qué piensa este gobierno cómo va a terminar el 2016 y cómo ven ellos que nos va a ir a todos en el 2017 de acuerdo con las pautas macroeconómicas previstas:

Concepto 2016 (en por ciento del PBI) 2017 (en por ciento del PBI)

Exportaciones 6,9 por ciento por ciento 7,7 por ciento por ciento

Importaciones 10,2 por ciento por ciento 9,8 por ciento por ciento

Consumo -0,9 por ciento por ciento 3,5 por ciento por ciento

Inversión -3,5 por ciento por ciento 14,4 por ciento por ciento

PBI -1,5 por ciento por ciento 3,5 por ciento por ciento

A simple vista, podemos observar que para que se produzca todo esto la columna del 2017, la apuesta está centrada en la “lluvia de inversiones” y en el crecimiento del consumo, justo dos de los elementos que podemos demostrar que decrecieron.

Agreguemos a este análisis que la inflación esperada es del 17 por ciento para el 2017, cuando todo hace suponer que este año terminara rondando el 42 por ciento.

Sabemos que la economía es dinámica y que los factores externos siempre -de una

Dirección de Información Parlamentaria

manera u otra- impactan en la economía, pero lo que también sabemos es que no existen indicadores macroeconómicos que sostengan semejante nivel de inversión planteada, o disminución de la inflación a los valores establecidos; en definitiva, una recuperación de la economía que haga crecer el PBI de -1,5 por ciento al 3,5 por ciento. Ojalá nos equivoquemos.

Pero lo que es mucho más preocupante es que no hay medidas planteadas por el gobierno o reflejadas en el presupuesto 2017 que indiquen que lo que proponen se cumpla, aunque más no sea una parte.

En definitiva, hasta ahora lo que podemos establecer es que el pilar fundamental de este presupuesto es el esperado “aumento de las inversiones”, cosa que no ocurrió hasta ahora con el levantamiento de las restricciones cambiarias, ni con el pago a los “fondos buitres”, y solo les resta esperar que el “blanqueo” se transforme en un aumento sostenido de las “inversiones”, y básicamente de las inversiones productivas y no especulativas. Pero tengamos en cuenta que si esto no sucede estaremos comprometiendo el futuro con semejante endeudamiento.

Por si no lo expresé anteriormente, serán las clases trabajadoras, los más desposeídos y gran parte de la clase media, las que a través de la pérdida de poder adquisitivo en lo que va del año en promedio han perdido un 12 por ciento, inflación 42 por ciento versus paritarias promedio 30 por ciento deberán hacerse cargo de la deuda.

Es necesario aclarar en este punto la drástica disminución en más de 10.000 de los cargos de planta permanente de los organismos, y la facultad del jefe de Gabinete para modificar las plantas. ¿Cuál será el criterio que se aplicará en materia de ciencia y técnica?

¿Por qué decimos esto? Miremos algunos datos más en profundidad del presupuesto 2017. El incremento promedio de los gastos del presupuesto es del orden del 22 por ciento -y aplicado el deflactor se transforma en un 2,3 por ciento real.

En su interior se observa un fuerte crecimiento de la Seguridad Social –influido por la mal llamada Ley de Reparación Histórica y la ampliación de los beneficiarios de la AUH- del 35,2 por ciento; intereses de la deuda, 32,3 por ciento, y gastos de capital, 32,1 por ciento. También, una fuerte caída en las Transferencias Corrientes, del 1,5 por ciento, explicada por el recorte de subsidios y el tarifazo que aplicaron este año, que terminarán de ejecutar el año que viene.

Se ha dicho públicamente que existen aéreas que crecen insignificadamente, como el Ministerio de Salud, en un 4,9 por ciento; Producción, en un 0,8 por ciento, y Cultura, en un 4,4 por ciento. Ciencia y Técnica fue subido pero es insuficiente.

Quiero hacer un análisis en particular en materia de salud. Se reduce en 6 millones de pesos el crédito asignado a la Prevención y Control de Enfermedades Endémicas (dengue, zika, chikungunya, chagas o hantavirus; un 40 por ciento, la Atención Sanitaria en Territorio, la cual se realizaba a través de las Unidades Móviles Sanitarias; un 50 por ciento, la cantidad de anteojos a entregar. Los Camiones Sanitarios u Oftalmológicos tienden a desaparecer. Desaparece la actividad de Fortalecimiento Socio-Sanitario-Ambiental para la Comunidad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, y el Abordaje Integral del Embarazo Adolescente. Se reduce en 107 millones de pesos 6 por ciento menos que en 2016 el presupuesto para el Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Juan P. Garrahan”, centro de tratamiento de alta complejidad para niños y niñas de todo el país.

Me referiré ahora a educación. Han desaparecido partidas como el Plan de Finalización



Dirección de Información Parlamentaria

de Estudios Primarios y Secundarios Fines ; se ha hecho el recorte del 50 por ciento en términos nominales de la partida destinada a la Educación de Adultos.

El presupuesto destinado a la formación docente para 2017, un área específica para la mejora de la calidad educativa a través del Instituto Nacional de Formación Docente INFD , disminuye un 24 por ciento en términos reales, mientras que Evaluación crece un 124 por ciento -evaluación sin capacitación , o sea un modelo a contrapelo de los trabajadores de la educación.

En materia de Transferencias a Universidades Nacionales, vemos con preocupación que no se ha ejecutado el fondo de 500 millones de pesos anunciados por el señor presidente para la cobertura de tarifas. Es notable el perjuicio que se realiza en contra de las nuevas universidades en materia de cobertura de Gastos Corrientes como de Infraestructura Universitaria. Luego me referiré en particular al tema de las becas.

En materia de Recursos se estima que crecerán un 25,2 por ciento, a pesar de como ya hemos mencionado la eliminación de retenciones a la minería o la baja en los productos como soja o maíz, la eliminación paulatina de impuestos como Bienes Personales o Ganancia Mínima Presunta, lo que obliga a suponer que el esquema de recursos es demasiado optimista.

En cambio, no se observa la eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios ni el “distorsivo” Impuesto a los Créditos y Débitos, los cuales aumentan en términos del PBI.

Es realmente demasiado optimista el crecimiento de la recaudación que por IVA se estima, la cual asciende al 26,5 por ciento, ya que la misma está por encima de la inflación y del crecimiento esperado.

Está claro que como consecuencia de lo antes descripto, será el endeudamiento la variable que utilizará el Gobierno no solo para enjugar el déficit de este año -5 por ciento del PBI sino que ya prevén un incremento del endeudamiento de 25.000 millones de dólares, de los cuales un porcentaje significativo será destinado a cubrir gastos corrientes de la Administración Pública.

Antes de arribar a una conclusión me gustaría mencionar algunos programas que desaparecen del presupuesto o que su incidencia pasa a ser casi nula: Conectar Igualdad, Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, Definición de Políticas de Coordinación Económica y Mejoras de la Competitividad, Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria; y se reducen: Progresar, Becas a Universitarios de Bajos Recursos, Programas de DDHH y Delitos de Lesa Humanidad, Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica (en otras palabras, quita de subsidios), Definición de Políticas de Comercio Interior contiene los Programas Ahora 12 o Precios Cuidados , Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo incluye inversión en puertos , PROCREAR, y para mencionar, organismos como el INTA, entre otros. No nos olvidemos de la Sedronar cuya participación sobre el total del presupuesto cae en 88 millones de pesos -del 0,035 por ciento en 2016 al 0,031 por ciento en 2017.

Con respecto a mi provincia, el Gasto Nacional en la provincia de Santa Fe según el presupuesto 2017 será de 90.843 millones de pesos, lo que representa el 3,84 por ciento del total asignado geográficamente. Cabe resaltar que en el promedio de las leyes de Presupuesto Nacional 2003-2016, la provincia recibió una asignación de 4,48 por ciento sobre el total distribuido.

Dentro de este conjunto de gastos del gobierno nacional en la provincia, la inversión

Dirección de Información Parlamentaria

real directa representa 1.720 millones de pesos, lo que expresa a las claras que la provincia de Santa Fe no es prioridad dentro del programa definido por el gobierno nacional.

Cabe mencionar que durante el trámite parlamentario se incorporaron muchas obras de interés en la llamada “Planilla B”, anexa al artículo 11.

No obstante eso, la definición institucional es que dichas obras adicionales no cuenten con financiamiento específico sino que se llevarán adelante mediante la reasignación de partidas previstas. Esta medida trae incertidumbre con respecto a su concreción y posibles impactos negativos sobre otras áreas prioritarias.

Pero supongamos que se obtuviera el financiamiento para todas estas obras, la provincia de Santa Fe pasaría de 3,3 por ciento al 2,4 por ciento en términos del total de proyectos de inversión incluidos en el presupuesto 2017.

Quiero insistir antes de terminar con mi intervención, en el grave problema del endeudamiento, a los 46.000 millones de dólares que mencionábamos anteriormente. Hay que agregar para cerrar este análisis, el fuerte endeudamiento y la velocidad del mismo que están generando las Lebac en pesos. Esta deuda provocada ya no a través del Ministerio de Finanzas sino a través de las medidas tomadas desde la dirección del BCRA, es de corto plazo de colocación, creando la obligación de pagar mensualmente una cifra cercana a los 1.000 millones de dólares. Hemos tomado conocimiento de que el stock de deuda en Lebac al 31 de octubre alcanza la cifra de 685.000 millones de pesos, superando la base monetaria. Esta cifra en dólares es de 45.000 millones. No debemos dejar de considerar el alto nivel de endeudamiento que están tomando las provincias, las empresas y algunas ciudades de nuestro país, y lo que es mucho más preocupante es que la misma ha sido en gran parte por no decir en su totalidad- en dólares.

Hago más las expresiones vertidas por el diputado Carlos Heller, el cual mencionó que sobre el total de la nueva deuda solamente el 0,6 por ciento tiene como destino Gastos de Capital; el 18 por ciento, Gastos Corrientes; el 42 por ciento, amortización de deuda; el 3 por ciento, cubrir aplicaciones financieras, y un 36 por ciento no tiene asignación específica.

Insisto, no solo es preocupante la magnitud del endeudamiento llevado adelante por este gobierno, sino la velocidad que ha adquirido el mismo, y con solo repasar nuestra historia sabemos cómo termina.

Por último, quiero referirme al tema de la calidad institucional y recordar cómo muchas veces los señores y señoras diputados y diputadas que hoy son del oficialismo criticaron la aplicación de los DNU como un agravio a este Congreso, por su discrecionalidad, falta de transparencia, favoritismo político, uso desmesurado, etcétera. Quiero recordar que el presidente Macri ha emitido el DNU 797/16 por el cual se modifica el presupuesto vigente en 100.000 millones de pesos, de los cuales 45.000 millones son destinados al soterramiento del FFCC Sarmiento y 12.000 millones, a la Estación Central Obelisco. Digo esto a modo de ejemplo sobre la calidad institucional tantas veces exigida en este recinto.

No es necesario aclarar que en nuestro país durante muchos años la política ha estado subordinada a la economía y hoy nuevamente lo está. Para nosotros es al revés: la economía debe estar subordinada a la política. Decía Perón: “Sin política no hay economía” y “esa política debe estar orientada a un proyecto político nacional”. Para



Dirección de Información Parlamentaria

eso es necesario un Estado fuerte; si no, caeremos en un “libre mercado”, que no es “un mercado libre”. Como dice José Pablo Feinmann: “Pero los pueblos sometidos no tienen economía, la economía los tiene a ellos”.

15. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA GONZALEZ (J.V.)

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

En su momento cuestionamos fuertemente la decisión del efímero “Grupo A” de dejar sin presupuesto para el año 2011, sin una herramienta fundamental para la gobernabilidad, a la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Por lo que me veo en la obligación moral de explicar que mi voto será negativo porque no se encuentra en riesgo la aprobación de dicho proyecto, y mi ideología me impide avalar un presupuesto de recortes que va impedir el desarrollo que necesita la Argentina.

Las autorizaciones de Operaciones de Crédito Público (endeudamiento) para servicios de deuda y gastos no operativos de la Administración Central contenidas en el Presupuesto con respecto al año 2016, son alarmantes. Para distintos plazos que van de 6 meses a 4 años pasan de 80.000 millones de pesos a 170.000 millones de pesos, representando un aumento del 112 por ciento. Las fuentes financieras de la Administración Nacional en 2017 ascenderían a 1.700.000 millones un 54 por ciento mayor a 2016, lo cual se utiliza para financiar el déficit fiscal y para realizar aplicaciones financieras relacionadas principalmente con la amortización de deuda.

Dentro de las fuentes se destaca el endeudamiento en moneda extranjera a largo plazo por 800.000 millones de pesos, casi 4 veces del contenido en el presupuesto 2016.

Aclaremos qué quieren decir todos estos números: se va a contraer deuda para gastos corrientes y se propone pagar algo así como el mínimo de la tarjeta. Hagamos cuentas, ¿esto es sustentable o responsable?

Desde hace años los que hoy conforman el interbloque oficialista señalaban que estábamos aislados del mundo, pues deberíamos definir qué entienden por “mundo”.

Parece que sería sólo un alineamiento acrítico con las políticas exteriores comerciales de los Estados Unidos y lo más célebre del sistema financiero. Nosotros tenemos una visión más amplia, menos cerrada, en definitiva, más propia y vemos que en el mundo también existe la integración regional, la multilateralidad, todo ello como la búsqueda de la independencia como país soberano. Ahora lejos de volver a algún lado estamos inermes frente a los vendavales que pueden desatarse si el sistema financiero internacional eleva el costo.

La ideología de un Estado mínimo se filtra inevitablemente en este presupuesto: hay un fuerte ajuste en Salud Pública, dado que el presupuesto en términos nominales es sólo un 4,9 por ciento mayor al de este año, y en Cultura, que presenta un guarismo similar, 4,4 por ciento. Pero la escalada de los precios de la economía por la devaluación real que aplicó esta administración implica que la caída sea superior al 30 por ciento.

Desde el punto de vista impositivo, estimamos demasiado optimistas algunas



Dirección de Información Parlamentaria

proyecciones, dado que, por caso, no conjugan la del crecimiento del IVA del 26 por ciento con las de la inflación y el consumo privado. Del mismo modo, no sería consistente la proyección de crecimiento por derechos de exportación, que no resulta razonable con ninguna variable quita de retenciones al complejo sojero exportador, proyección de cosecha estimada y sólo se explicaría por un aumento del precio de las materias primas en una proporción que en ningún horizonte aparece. Idénticas conclusiones podemos aplicar respecto a las proyecciones hechas en materia de recaudación por impuesto a las ganancias, salvo que el Ejecutivo desista definitivamente del hasta ahora sólo declamado proyecto de reforma a la cuarta categoría de este tributo. Más allá de eso, lo más importante sobre este punto es que el crecimiento nominal previsto para la recaudación impositiva se apoya en el aumento del IVA, de Ganancias y de los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, mientras que se reducen en términos nominales el Impuesto a los Bienes Personales y el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, un aumento de la regresividad del sistema tributario argentino. Queda claro que así los impuestos de los que más tienen, descienden, y los que pagan todos los sectores, incluso los más vulnerables, aumentan.

Por otro lado, he consagrado mi vida a la lucha por los Derechos Humanos desde adolescente y no sería fiel a mí misma si dijera que comprendo los recortes previstos, observamos un recorte del 35 por ciento. ¿Qué significa esto? Una drástica reducción de las políticas de promoción y defensa de los derechos humanos, como en el caso de las publicaciones que se reducen a cero y que la Memoria, la Verdad y la Justicia dejen de ser un eje central del Estado Nacional. Esto sería un retroceso enorme en la búsqueda de los hombres y mujeres que fueron robados por la última dictadura cívico militar, implicaría que madres, abuelas, hermanos, tíos... podrían no abrazarse nunca con los que llevan décadas buscando, no poder reencontrarse con los restos de las personas que aman y fueron arrancadas de sus casas violentamente ¡Pero hay algo mucho peor! Podríamos volver a tener que buscar a argentinos y argentinas que desde el Estado hagan desaparecer nuevamente.

Es profundo mi rechazo a pasar de ser un Estado modelo a nivel mundial en el desarrollo de los Derechos Humanos a nivel judicial, para pasar a ser un país observado por la ONU por tener presos políticos y un Estado Nacional que mira para otro lado cuando se violan los derechos de las personas que no piensan como el oficialismo o de las personas más vulnerables. Será que quieren consolidar ese cambio y lo buscan a partir de la no publicidad de los derechos, un pueblo que no sabe qué derechos tiene no puede defenderlos.

Yo claramente ante este proyecto quiero decirles a todos y todas que hago mías las palabras inmortales de Néstor Kirchner el 24 de marzo de 2004 para explicarles por qué no cambio de idea ni avalo las medias tintas en esto: “Fueron muchas ilusiones, sueños, creímos en serio que se podía construir una patria diferente y también cuando escuchaba a H.I.J.O.S. recién vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelvan a reinar en la patria”.

Otro tema que quiero tocar son las previsiones para las universidades, en donde tenemos la aplicación profunda y técnica de la frase presidencial “¿Qué es esto de universidades por todos lados?”. Clarísimo es que las universidades de gestión privada ninguna

Dirección de Información Parlamentaria

molestia le generaban y que solo se refería a las de gestión pública.

Ello se trasluce en que las previsiones presupuestarias son inferiores a las solicitadas por el Consejo Interuniversitario Nacional, teniendo en cuenta especialmente que se incorporan nuevas universidades. Al analizar el detalle del presupuesto se desprende que el aumento para gastos corrientes es del 26 por ciento salarios, agua, luz y gas, y que en el rubro de gastos de capital bienes y equipamiento, construcciones existe una reducción del 70 por ciento. En las anteriores previsiones presupuestarias no se incluían los aumentos salariales del personal de las universidades para no encorsetar las negociaciones salariales, aspecto que no se cuida en este proyecto.

Este presupuesto plantea el congelamiento de la planta de personal, dado que condiciona la incorporación de nuevos docentes al visto bueno de la Secretaría Universitaria del Ministerio de Educación. Esto afecta la autonomía universitaria, pero sobre todo es un golpe para las nuevas universidades del conurbano bonaerense y el interior del país, ya que son las nuevas universidades quienes necesitan año a año ampliar su estructura edilicia y su planta de personal docente y no docente. Es un golpe a la equitativa distribución de conocimiento a la que debe propender un Estado interesado en los sectores populares.

Ello se confirma si sumamos la inclusión de 1028 millones de pesos del refuerzo anual entre 21 universidades mientras que se discriminaron arbitrariamente otras 35 que no recibieron nada, a pesar de que varias de ellas ya habían declarado la emergencia económica y financiera sin explicación alguna del criterio utilizado.

En el presupuesto 2017, ciencia y tecnología pierde peso y cualquier indicador que se analice confirma este resultado. La Finalidad Función Ciencia y Técnica englobaba programas distribuidos en nueve ministerios retrocede un 12,11 por ciento en el total del gasto público nacional cuando se compara la propuesta 2017 versus la de 2016. Es más, Ciencia y Técnica comenzó a perder terreno durante 2016 ya que los refuerzos hacia el área fueron menores al promedio. Entre 2004 y 2015 se logró que el peso de este rubro se duplique frente al PBI 0,20 por ciento a 0,38 por ciento. El año 2017 marca un quiebre con esa tendencia, llevando este indicador a cifras similares a las de 2009.

Todas estas conclusiones se mantienen más allá del adicional de 1.290 millones de pesos para toda el área científica en general, dado que seguirá siendo un 10 por ciento inferior al presupuesto de 2016 y se mantiene la tendencia decreciente en organismos fundamentales para la intervención estatal eficiente y tecnificada, como el INTI y el INTA.

No puedo avalar las proyecciones aludidas: formo parte de un proyecto político que aumentó el presupuesto destinado a las universidades, la cantidad de becas, y democratizó el acceso a la universidad, creándolas donde no había.

Para fundamentarlo quiero citar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el discurso pronunciado el día 25 de septiembre de 2015, al inaugurar obras en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires: "...Porque además, también, de estos fondos que se destinan a las universidades, que como todos saben, a partir de la reforma del 18 son autonómicas y por lo tanto administran sus propios recursos, manejan sus propios recursos, además de eso hemos puesto muchos recursos desde el Ministerio de Planificación, con infraestructura. El corto hablaba de 2.000 millones, pero permítanme decirles que el que hizo la publicidad está equivocado, ya llevamos puestos más de 4.000 millones de pesos en infraestructura. Esto por fuera de los



Dirección de Información Parlamentaria

recursos presupuestarios universitarios, esto por fuera del uno por ciento, sin contar – además– todo el sistema de becas universitarias, financiadas por el Ministerio de Educación, que superan los 1.000 millones y que también están por fuera del presupuesto universitario...”.

Si analizamos el presupuesto educativo nos encontramos con que el destinado al instituto de formación docente cae un 24 por ciento en términos reales; que la Educación Técnica cae un 27 por ciento; que la distribución de libros cae de 19.300.538 a 3.400.000; que el Plan PROGRESAR presenta una reducción en términos nominales de 8.946 millones de pesos a 5.519 millones, y que en el caso de las becas universitarias para alumnos de bajos recursos hay un recorte de 4.984 cupos 19.334 becas otorgadas en 2016 contra 14.350 en 2017, y en la cantidad de Becas asignadas a Carreras Prioritarias, una baja de 10.459 cupos 31.394 en 2016 contra 20.935 en 2017, y que el Plan Fines tiene presupuesto cero. Eso sí, se aumenta el presupuesto destinado a evaluación. Entendemos que es una distribución regresiva. Queda en evidencia que el objetivo es evaluar pero sin capacitar a aquellos que deberán evaluar o serán evaluados, si quieren capacitarse que se ocupen ellos e inviertan en la educación privada.

El presupuesto en Educación también pierde importancia relativa. El presupuesto 2017 prevé para la finalidad Educación y Cultura un equivalente al 6,8 por ciento del gasto público total. En 2015 este porcentaje fue del 7,4 por ciento y en 2016, del 7,8 por ciento. De cumplirse el presupuesto 2017, la relación entre pago de deuda versus fondos destinados a Educación alcanzará un valor máximo dentro de los últimos años: llegará al 1,55. Es decir, se pagará alrededor de un 55 por ciento más de intereses y capital por deuda de recursos invertidos en Educación.

Para terminar quiero dejar en claro que yo soy parte de los que hemos hecho realidad un país muy diferente al que están plasmando en este presupuesto. Porque hemos defendido con convicción el reclamo de la independencia económica es que hemos disminuido a límites históricos la deuda, sin dejar de desarrollar y aumentar considerablemente también lo invertido en ciencia, en educación y en la plena vigencia de los derechos humanos.

16. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO KICILLOF

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

Listado de Universidades que en la propuesta del dictamen de mayoría no recibieron incrementos en los montos transferidos por el Estado Nacional respecto de los determinados en el proyecto original:

Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de Comahue
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de Entre Ríos
Universidad Nacional de Formosa

Dirección de Información Parlamentaria

Universidad Nacional de General Sarmiento
Universidad Nacional de La Pampa
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional de La Rioja
Universidad Nacional de Luján
Universidad Nacional de Misiones
Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Nacional de Río Cuarto
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Nacional de San Luis
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Universidad Nacional del Sur
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de Lanús
Universidad Nacional de Villa María
Instituto Universitario Nacional del Arte
Universidad Nacional de Chilecito
Universidad Nacional de Chaco Austral
Universidad Nacional de Tierra del Fuego
Universidad Nacional de Moreno
Universidad Nacional de José Clemente Paz
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Comechingones
Universidad Nacional de Alto Uruguay
Universidad Nacional de San Antonio de Areco
Universidad Nacional de Guillermo Brown
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Nacional Scalabrini Ortiz

Algunas de las obras que no fueron contempladas en el proyecto de presupuesto 2017 original ni en el proyecto presentado en el dictamen de mayoría:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Instalación de columnas y reconversión de alumbrado público en el Partido de Escobar
N° Exp: 173.842/15

Plan de nuevas Luminarias en el Partido de Escobar y Subestación Parque Industrial en Loma Verde N° Exp: 174.034/15

Obras de Pavimentación y repavimentación comprometidas por Aysa dentro del plan de Obras del Acueducto del Paraná:

Reparación de Ruta 25 TRAMO Cazador - Paraná de las Palmas

Repavimentación de Ruta 26 desde Planta Purificadora hasta Independencia

Pavimentación Independencia desde Ruta 26 hasta Mendoza

Pavimentación Mendoza entre Independencia y caseros

Pavimentación Caseros entre Mendoza y La pista

Pavimentación La pista entre caseros y sucre



Dirección de Información Parlamentaria

Pavimentación Sucre entre La pista y camino de barrios.
Pavimentación de calle Islandia
Re-pavimentación de Ruta 25 Compromiso asumido en el marco d la creación del Puerto Regasificador.
Re-pavimentación Av. Belgrano
Re-pavimentación Av. Benito Villanueva. Etapas 1, 2, y 3
Pavimentación Calle Beliera - Maq. Savio / Garín
Re-pavimentación de calles:
Rep. Del Paraguay, Cnel Pringles e Italia, MAQ. SAVIO
Santa Fe entre Saavedra y Moreno, ING. MASCHWITZ
Moreno y Los Andes, ING. MASCHWITZ

NEUQUÉN

Terminal de Colectivos de ZAPALA
Equipamiento bomberos voluntarios de ANDACOLLO y CHOS MALAL
Dos polideportivos (Barrio Limay y Barrio Altos del Limay) en NEUQUEN CAPITAL
Puente en la Ruta Nacional 40 sobre el Río Collón Cura en LA RINCONADA
Red de Alcantarillado Cloacal Zuna Sur
Pavimento Urbano Barrio Sarmiento etapa 1ª
Pavimento Urbano Barrio Sarmiento etapa 1B
Pavimento Urbano Calle Chaco entre Caleta Olivia y Guatemala
Pavimento Urbano Barrio Ruca Niyeu
Pavimento Urbano Barrio 202 viviendas
Pavimento Urbano Calle Franzo, acceso Parque Industrial
Red de distribución de Energía Eléctrica y alumbrado público 4000 lotes, segunda meseta. Etapa 1 y 2
Red de agua potable en sector oeste, segunda meseta. Etapa 1, 2, 3 y 4
Hogar de protección Integral para mujeres en situación de violencia
Parque recreativo lineal en zona Barranco

CHUBUT

Obras viales con convenio suscripto:
Ruta N° 3. Tramo Comodoro Rivadavia- Caleta Olivia.
Ruta N° 259. Tramo Esquel- Trevelin.
Terminación de la Ruta N° 19 tramo Corcovado —Trevelin
Obras aeroportuarias:
Aeropuerto Esquel.
Aeropuerto Trelew, con contrato vigente.
Aeropuerto de Comodoro Rivadavia, obra ya licitada.
Obras de agua y saneamiento:
Desagües cloacales de la localidad de Gaiman, con contrato vigente.
Rehabilitación planta Efluentes y cañería de Impulsión de Rada Tilly con convenio vigente.
Toma – Planta Potabilizadora y Obra complementarias, de Puerto Madryn.
Ampliación Planta Potabilizadora de la Ciudad de Rawson.
Toma- del Acueducto “Reserva Arroyo Buitreras” de la Ciudad de Esquel.
Electrificación Sistema del Acueducto Comodoro Rivadavia.



Dirección de Información Parlamentaria

Emisarios Marinos de la Ciudad de Comodoro Rivadavia.
Nueva planta de Tratamiento Sur- Puerto Madryn.
Nueva planta de Tratamiento Norte de la Ciudad de Trelew.
Defensas Costeras en Playa Unión, Rawson.
Nuevas Áreas Bajo Riego (Meseta Intermedia — El Maitén)
Obras Pluviales:
Desagüe Pluvial calle Irigoyen de la Ciudad de Puerto Madryn.
Desagüe Pluvial de la Ciudad de Esquel.
Desagüe Pluvial Oris de Roa de la Ciudad de Trelew.
Desagüe Pluvial Sur de la Ciudad de Comodoro Rivadavia.
Obras Hídricas:
Regulación del Lago Fontana.
Gaseoducto Patagónico cordillerano (En Chubut Planta Compresora Río Seruguer,
Planta Compresora Gobernador Costa — Loop Gobernador Costa-Trevelin — Leleque)
Obras Eléctricas:
Doble Terna 132 kv Pico Truncado — Comodoro
Construcción de la Línea 132 kv Futaleufu — Alicura.
Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters)
Reparación Pilotes Muelle Almirante Storni, Puerto Madryn.
Ruta Nacional N° 40 - Corredor Vial Los Cipreses - Samoré - Ruta Nacional
Malla 107 B
Malla 630 - I
Malla 634
Construcción de Escuela de Nivel Inicial N° 484 - Cerro Radal, Chubut.
Construcción de Jardín en Barrio La Emita Área 12 - Rawson, Chubut.
Construcción de Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Chubut.
Mejoras e Infraestructura en PN Los Alerces.

TIERRA DEL FUEGO

Ampliación Muelle Histórico Río Grande
Construcción Viviendas en la Agencia de Extensión Rural Río Grande - Provincia de
Tierra del Fuego
Construcción de 3 viviendas de 100 m2 en la Agencia de Extensión Rural Ushuaia -
Provincia de Tierra del Fuego
Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Tierra del Fuego
Construcción Subsede en Ushuaia
Puesta en Valor Seccional La Portada - Parque Nacional Tierra del Fuego
Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego
Construcción Antena Multipropósito N° 4
Ni en el mensaje, ni el proyecto de Ley, ni el detalle de Fondos Fiduciarios se hace
mención al Fideicomiso para la interconexión entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, el
presupuesto 2016 establecía en el artículo 57 que se ratificaba el decreto 1423/ 15 que
autorizaba la emisión de deuda por \$ 1.000 millones para su constitución. Se puede
pedir por Programa N° 20 del Ministerio del Interior “Planificación Territorial de la
Inversión Pública”
No figura ninguna partida específica en relación a las obras correspondientes al



Dirección de Información Parlamentaria

Interconectado Eléctrico para la provincia de Tierra del Fuego. Obras cuyo proceso licitatorio ya se encontraba muy avanzado en el 2015.

No figura ninguna partida específica en relación a las obras correspondientes al SEDRONAR en Ushuaia y en Río Grande, pendientes de ejecución.

Obras en Ushuaia Eje Laserre y Terminal Portuaria (repavimentación, agua, cloaca, veredas y mobiliario urbano, terminal de venta de pasajes y paseo de artesanos)

Obras en Río Grande: a) pileta de natación, b) gimnasio de chacra XIII, c) puente peatonal

SANTA CRUZ

Escuela industrial n°9 – construcción de aulas, SUM y dependencias – 3.000 m²

Rehabilitación calzada y autovía – ruta provincial n°11

Multitrocha ruta provincial n°12 (52km) tramo Caleta Olivia Pav– Pico Truncado:

Planta de tratamiento y emisario submarino

Rehabilitación calzada y autovía – ruta provincial n°20

Construcción obras básicas y pavimento – ruta provincial n°18

Pavimentación ruta provincial n°9 (195km)

Ruta provincial n°2 (84km)

Ruta provincial n°25 (205km) tramo Pto San Julián – Gob. Gregores:

Planta de osmosis inversa

Tramo piedra buena – San Julián

Ruta provincial n°41 – Tramo Chalten – Límite con Chile

Ruta provincial n°1 – Cabo Vírgenes (107km)

Ruta provincial n°7 (65km)

Línea 132 kv 115km – Piedra Buena – San Julián

Línea 132 kv 52km – Pico Truncado – Caleta Olivia

Línea 132 kv 80km – Pico Truncado – Las Heras

Línea media y baja tensión anillado de la ciudad

Automatización de los centros de distribución

Acueducto de abastecimiento de agua potable

Acueducto para el desarrollo

Construcción de un segundo módulo de provisión de agua potable por ósmosis inversa, similar al recientemente terminado

Nuevo sistema de depuración de líquidos cloacales a través de sistemas ecológicos y naturales.

CHACO

Plan director de desagües cloacales

Sistema de abastecimiento de agua potable

Plan director de desagües cloacales

Proyecto hidráulico de la red desagües pluviales de la sub cuenca 18 - colector

Arribalzaga - limpieza riacho Araza

Plan director de desagües cloacales

Obra de defensa ampliación del canal calle 16

Construcción 30 predios polideportivos

Construcción seis edificios escolares de educación secundaria



Dirección de Información Parlamentaria

Lat 132 kv DT-ST ET 500/132 kv Saenz Peña – Nueva ET 132/33/13,2 kv Campo Largo y nexos 132 kv DT a Saenz Peña – Villa Angela.
Proyecto de red domiciliaria e industrial de gas RESISTENCIA - BARRANQUERAS - VILELAS - FONTANA - MARGARITA BELEN - COLONIA BENITEZ - LAS PALMAS
Proyecto de red domiciliaria e industrial de gas QUITILIPÍ - SAENZ PEÑA - CHARATA - VILLA ANGELA - PUERTO TIROL - P. PLAZA - MACHAGAI
Planta generadora de energía solar fotovoltaica 10 MW
Construcción LMT 33 kv Fuerte Esperanza- Comandancia Frias y estación transformadora 33/13.2 kv Comandancia Frias.
Infraestructura y diversificación de los procesos productivos para el auto consumo y abastecimiento local
Desarrollo hortícola
Hospital nivel IV "Doctor Salvador Mazza"
Construcción hospital general, General San Martín
Red de fibra óptica - última milla
Construcción distrito tecnológico y edificio Ecom etapa I
Master plan desarrollo productivo y turístico en área de Los Humedales
Master plan El Impenetrable - plan integral de desarrollo turístico y gestión sostenible
Ruta provincial n°13, tramo empalme Ruta nacional n°11- empalme Ruta nacional n°95. Construcción de pavimento. 174 km.
Ruta provincial Juana Azurduy, tramo Miraflores-empalme Ruta provincial n°100- Nueva Pompeya. 130 km.
Acceso a Puerto Las Palmas, tramo empalme Ruta provincial n°56- Puerto Las Palmas.
Construcción obras básicas y pavimento. 15,023 km.
Ruta provincial n°4, tramo empalme Ruta nacional n°16-Villa Berthet.
Repavimentación. 50 km.
Ruta provincial n°3, tramo empalme Ruta provincial n°90-Pampa del Indio.
Repavimentación. 74 km
Refuncionalización Puerto Barranqueras, tramo accesos y playa de estacionamiento.
Repavimentación y construcción de pavimento. 8,34 km.
Construcción 1500 viviendas rurales autoabastecidas con energías renovables

17. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA MENDOZA (M.S.)

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

Quiero comenzar dirigiéndome a quienes no están dentro de este recinto, quiero principalmente hablarle a mis vecinos y vecinas de Quilmes, quiero que sepan que como militante política, como militante del Frente para la Victoria, no vamos a apoyar una sola medida que sea en desmedro del pueblo. Es por esto que no vamos a acompañar un presupuesto que nos ajuste, que nos recorte, que nos endeude y perjudique el presente y



Dirección de Información Parlamentaria

el futuro de nuestro país.

Tenemos en nuestras bancas un presupuesto que condona deudas a grandes empresas, como es el caso de EDENOR Y EDESUR.

Estamos frente a un presupuesto que asigna más dinero para pagar una deuda que se generó en estos últimos diez meses, que para el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.

Tenemos enfrente un presupuesto que, contra todas las voces docentes y estudiantiles que se han levantado y movilizado como en mayo de este año, recorta en nuestra educación universitaria. Tan es así que tuve que presentarle al diputado Luciano Laspina, que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una nota para que tenga a bien incorporar al proyecto un aumento en las partidas presupuestarias asignadas a las universidades nacionales para la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), con el fin de terminar con las obras de la escuela secundaria técnica que depende de la UNQ. En plena campaña, el entonces candidato Mauricio Macri públicamente se preguntó: “¿Qué es eso de universidades por todos lados?”, es una pregunta para nada errónea ni inocente.

El recorte a las universidades es el espíritu de la ideología del presidente, es la manera de pensar el Estado mediante el ajuste a la educación, a la salud en beneficio de las ganancias empresariales. Estamos nuevamente en las puertas de volver a padecer la fuga de cerebros de los 90, estamos viendo a nuestros científicos formados y contenidos por nuestras universidades nacionales emigrar al exterior.

¿Cuál es el problema con Quilmes, que aparece tan castigado en el presupuesto? Lo invito a mi distrito para que vea la realidad de nuestros vecinos; lo invito al barrio "El Fortín" del partido de Quilmes para que compruebe usted mismo si este es un presupuesto justo; lo invito para que vea las necesidades de los vecinos y vecinas de Quilmes y anhelo que den cuenta que no es una prioridad quitar progresivamente las retenciones a mineros y sojeros y sí lo es que nuestros vecinos vivan con la dignidad que se merecen.

La situación es particularmente preocupante en mi provincia, la provincia de Buenos Aires, donde ya prevén que la deuda se duplicará en dos años. Estamos hablando de una situación a nivel nacional de la que ya se han hecho eco incluso medios internacionales. Algunos analistas la han calificado como la mayor emisión de deuda de nuestra historia, con el agravante de que no se está destinando a generar recursos que faciliten su devolución sino a gasto corriente, y la provincia de Buenos Aires colabora con ese drama muy especialmente, tal vez porque la gobernadora María Eugenia Vidal está más preocupada en satisfacer los propósitos políticos del presidente Mauricio Macri que en dar buen cumplimiento a sus obligaciones para con el pueblo que la consagró en su puesto.

El pueblo argentino ya no tolera el hambre que trae el peso de la deuda sobre sus espaldas.



Dirección de Información Parlamentaria

Con este presupuesto recortan en programas como el FinEs, que les dio a nuestros jóvenes otra oportunidad. Recortan en programas que distribuyen métodos anticonceptivos y hacen a nuestra salud sexual.

La lucha contra la violencia a las mujeres no percibe incremento de ningún tipo, el gobierno del diálogo desoye las movilizaciones como la de Ni Una Menos o el Paro Nacional de Mujeres. Todo esto incluso sin mencionar que el macrismo tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires subejecutan presupuestos vinculados a esta temática. Esta lamentable práctica ya habitual significó que durante la primera mitad del año la gobernadora María Eugenia Vidal solo ejecutara el 2,08% del programa “Prevención y Atención de Violencia de Género”.

Como formulamos en el dictamen de minoría, el programa “Formulación e implementación de políticas públicas de la mujer”, dependiente del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, tiene previsto un incremento del 12 por ciento, es decir, una caída en términos reales del 8 por ciento. Por este camino, teniendo en cuenta los valores que expresan, ¿cuánto falta para que el ajuste alcance al Calendario Nacional de Vacunación, por ejemplo?

Nosotros entendemos y así lo realizamos en doce años de gestión que tenemos que tener un Estado presente, que vele por su pueblo, no un Estado que ajustando en la educación, en la salud, beneficie a las empresas y a los sectores concentrados de la economía de nuestro país.

Votar a favor del presupuesto no es aportar gobernabilidad. ¿De qué gobernabilidad hablamos cuando se hace a costa de la entrega de soberanía? Tomar deuda indiscriminadamente, sin especificaciones, sin ningún tipo de dato preciso hacia donde irán esos montos, es un claro síntoma de que estamos empezando a perder soberanía nuevamente. Este proyecto obliga a las provincias a financiar una política fiscal deficiente cuya única salida es la toma de deuda.

Por favor, diputados y diputadas, reflexionen y piensen en el pueblo. Cuando se trata de representar al pueblo no es una cuestión de quién suma más voluntades, una contienda entre oficialismo y oposición. El actual oficialismo no tuvo sentido de gobernabilidad durante doce años de sistemática oposición a los presupuestos de Néstor y Cristina Kirchner. A la presidenta llegaron incluso a dejarla sin esta herramienta en el año 2010, única vez que ocurrió esto desde recuperada la democracia en 1983. Durante doce años vinieron a este debate cuestionando la veracidad de las cifras. Lo que nunca pudieron hacer fue decir que presentábamos presupuestos de ajuste. Y para los amantes de la autocrítica, hay que asumirlo: el mayor proceso de endeudamiento de la historia se realiza con mayoría opositora en ambas cámaras. Este bloque va a votar con coherencia. Votar a favor este presupuesto, como fue votar a favor de los fondos buitres, es lo mismo. El presupuesto de endeudamiento, hipoteca el futuro de nuestros hijos e hijas. No cuenten con nosotros para eso.



18. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA MERCADO

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

Este presupuesto muestra el desinterés de esta gestión por las políticas de derechos humanos, con recorte para el archivo de la memoria, el fortalecimiento de los juicios contra delitos de lesa humanidad y la falta de apoyo a todos los organismos de derechos humanos.

Pertenezco a un espacio político que tiene como filosofía que los derechos humanos son pilar fundamental de la democracia. El acceso a la salud segura, a la educación, a una vivienda digna, a los programas que garanticen el alimento de nuestros chicos y la dignidad de nuestras familias son sin dudas derechos humanos, a los que no vamos a renunciar aprobando los injustos recortes de este presupuesto.

Queremos más justicia e inclusión social, queremos libertad económica y soberanía política. No queremos condicionamientos del Fondo Monetario, no queremos pobreza y exclusión. No queremos cambiar futuro por pasado.

19. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MOYANO

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

Nos encontramos en este recinto para votar la Ley de leyes, que en esta oportunidad muestra por primera vez el esbozo de un plan económico de este gobierno y al mismo tiempo exhibe el resultado del primer año de gestión.

En ese sentido, presidente, quiero articular mi discurso desde dos aspectos diferentes.

Uno que intenta ser más económico y donde desde mi punto de vista se ve claramente la falta de un plan, o al menos del mal diagnóstico que tenía Mauricio Macri de la realidad cuando hablaban del “mejor equipo” y de lo fácil que resultaría administrar nuestro país. Por eso quiero empezar recordando las palabras del presidente en la apertura de sesiones ordinarias del 1º de marzo de este año. Cito textual: “El déficit del 7 por ciento del PBI es de uno de los mayores que tuvo el país”, definiéndolo como uno de los graves problemas de nuestra economía. Un poco antes, el 14 de enero el ministro Prat Gay había explicado el plan fiscal y las metas para 4 años en una conferencia de prensa de más de una hora, donde sostuvo que los 7 puntos de déficit eran los mayores de los últimos 40 años y que en el 2016 lo bajarían un punto.

Incluso hubo una discusión con el ex ministro Kicillof acerca de si el déficit debe incluir o no las transferencias del Tesoro y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses, y sí estaba bien incluirlas en la cuenta para llegar al 7%. No porque lo crea así, pero me interesa tomar este número que de forma catastrófica presentó tanto Mauricio Macri

Dirección de Información Parlamentaria

como su equipo, para mostrar el fracaso del plan económico de Cambiemos.

Hago un paréntesis para comentar también que tanto en esa conferencia de prensa, como en la apertura de sesiones ordinarias, Macri y Pray Gay resaltaron el cumplimiento de la promesa de campaña con el sector agroexportador y el apuro que tenían en cumplir con la promesa de eliminar el Impuesto a las Ganancias, la única concreta que Macri le hizo a los trabajadores en campaña y que todavía siguen esperando.

Pero en cuanto al déficit fiscal, sin los ingresos del Banco Central y del Anses, en septiembre de este año fue de \$58.600 millones, un 50% más alto que el de septiembre de 2015, con ingresos que crecen al 30% y egresos al 40%. El acumulado en 9 meses muestra que también aumentó un 50% respecto al 2015 del ex ministro Kicillof y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno actual, que tanto criticó el derroche de la gestión anterior, no deja de aumentar el despilfarro mes a mes, en comparación con lo que antes criticaba. El mismo presupuesto estima un déficit que se mantiene en el récord del 7%.

¿Cómo se explica esto considerando el ajuste que tuvieron los salarios, sobre todo en el Estado, e incluso el recorte de subsidios al transporte y tarifas? A pesar del terrible ajuste, se mantiene en el nivel que el mismo presidente clasificó como record.

Es probable que una parte se explique por los recursos que el Estado resignó frente al agro y la minería, pero aun así esto vuelve a poner de manifiesto que el Ejecutivo no sabe hacia dónde va, que improvisa y que no tiene plan o al menos que no funciona.

¿Por qué digo esto? Porque si bien el gobierno transfirió una enorme cantidad de recursos desde los asalariados hacia estos sectores concentrados a través de la devaluación, en el presupuesto del año que viene no cumple ni siquiera con la promesa de bajar 5 puntos las retenciones a la soja. Por supuesto que creo que esto es correcto e incluso que quizás se les podría pedir a ese sector un esfuerzo mayor considerando la pérdida de poder adquisitivo que sufrió la mayoría de la población, pero esto me lleva a otra pregunta: ¿qué pueden esperar los trabajadores respecto del gobierno si el próximo año ni siquiera va a cumplir con los sectores exportadores a los que Cambiemos le cuida sus intereses?

En esa misma conferencia que cité con anterioridad Prat Gay prometía que la inflación a partir del segundo trimestre sería de un dígito, que en el segundo semestre el país iba a crecer, que el pago a los fondos buitres iba a atraer inversiones, que se iba a terminar el derroche y la verdad es que no cumplió nada. Incluso muchos indicadores, como la inflación, la recesión, el déficit, la balanza comercial o el endeudamiento han empeorado y aún no se comprende bien cuál es el plan económico, salvo que sea ir a tumbos.

Creo que el otro dato relevante en términos de la macroeconomía, es la deuda que viene emitiendo el Gobierno y que en lugar de mejorar la inversión sólo ha aumentado la fuga de divisas y los intereses, generando una gran mochila para el futuro de los argentinos y ninguna perspectiva a largo plazo.

Personalmente veo que este año ha sido muy parecido al 2014 en términos de indicadores sociales con la devaluación, suba de tasa de interés, pérdida de poder adquisitivo, aumento de pobreza e indigencia y pérdida de empleos. Creo que respecto del 2014 el cambio más importante que ha introducido Macri, es el reemplazo de la emisión y el uso de reservas por el aumento exponencial de la deuda externa, a pesar de que en 2014 se acordaron los pagos con el Club de París, el Ciadi y Repsol.



Dirección de Información Parlamentaria

Respecto de esto quiero traer un análisis de un economista con el que no comparto un sólo posicionamiento político, pero creo que da en un punto que es importante destacar. José Luis Espert escribió hace poco que el déficit fiscal genera un círculo vicioso que encierra a la Argentina durante los últimos años, a excepción del período 2003 a 2007. Explica que los ciclos para financiar el déficit fueron de emisión y endeudamiento interno o crecimiento de la deuda externa. Después del frustrado “Rodrigazo” se cubrió con emisión, Martínez de Hoz lo hizo con deuda externa (del que dicho sea de paso se benefició el grupo SOCMA), luego Alfonsín volvió a realizar ese ciclo de emisión y endeudamiento interno (que también beneficia al grupo SOCMA), Menem aumentó la deuda externa incluso con la venta de empresas del Estado que él llamaba “inversión” y en los últimos años de gestión se recurrió a la emisión para financiar el déficit creciente, aunque como dije también hubo un aumento menor de la deuda pública con acreedores externos.

Hoy el gobierno de Macri aún tiene margen para colocar deuda pero la pregunta es, ¿Qué es lo que pretende financiar con eso? Hasta hoy sólo creció la fuga y la pregunta que tampoco responde el presupuesto es cómo pretende salir de ese círculo. Algunos en el Gobierno hablan de la “convergencia”, pero sólo resulta un relato cuando uno va a los indicadores del Indec o el análisis de las importaciones, como cuando con el cepo nos hablaban de la industrialización. La convergencia implica que se complementan el mayor crecimiento con la inversión de calidad para reducir el déficit a partir de la sustitución de importaciones en forma progresiva. Es decir que vamos reemplazando importaciones industrializadas por producción nacional para equilibrar la balanza. Suena lindo pero no hay una sola señal en el presupuesto que apunte a eso; más bien todo lo contrario: las importaciones crecen porque traemos frutas y verduras de España y Chile y firmamos tratados comerciales con China con las reglas que ellos imponen, como se vio en el escandaloso proyecto que pretendían pasar por esta Cámara la semana pasada.

La realidad muestra que la inversión es mínima, el déficit no se reduce, la inflación no baja y el país sigue estancado a pesar del pago a los buitres y el endeudamiento. Desde el Frente Renovador nos cansamos de insistir con que no alcanza con crecer, sino ponemos el eje en el valor agregado. A veces discutimos un poco entre nosotros por provenir de sectores gremiales y otros del sector empresario, pero tenemos en claro que necesitamos un desarrollo sustentable para crear empleo de calidad, porque con el campo no alcanza para darle trabajo digno a todos los argentinos. Insisto en que no comparto ninguna de las opiniones políticas de Espert pero es él quien hace la analogía entre el actual programa de gobierno de endeudamiento externo -o mejor dicho la falta de programa- con los de Menem-Cavallo y Martínez de Hoz. Cito su nota del portal Infobae: “Si el gobierno de Cambiemos piensa que a ellos, lo que les salió mal a Martínez de Hoz y Menem, o sea financiar déficit fiscales con deuda pública, sí les va a salir bien, más allá de un pecado grande de soberbia, se estarían equivocando feo, muy feo”.

En el presupuesto se observa que el endeudamiento es en su gran mayoría para gastos corrientes y refinanciación de deuda. Y en este punto recordemos que el segundo semestre también iba a disparar la inversión en obra pública pública y por las barbaridades que cometieron con el aumento de tarifas, suspendieron la mayoría de esas inversiones, como puede verse en la construcción que sólo arrastra pérdidas de puestos

Dirección de Información Parlamentaria

de trabajo y no despegar.

Es en sus reglas, en el incumplimiento de sus objetivos, en la imposibilidad para modificar lo que antes criticaban y desde su concepción macroeconómica, donde se ve con claridad su fracaso.

Pero no es esta mi crítica principal al presupuesto y quiero pasar ahora a la segunda parte de lo que me parece importante dejar asentado en este debate. Creo que el gobierno en la planificación del 2017 vuelve a pecar de una enorme falta de sensibilidad social y de visión de mediano plazo, sobre todo si consideramos que el mismo Indec manifiesta la gravedad de la situación social cuando muestra los números de pobreza. Nuevamente el sector del trabajo vuelve a ser el más postergado, como también puede verse en el discurso antisindical del gobierno, que casualmente vuelve a la tapa de los diarios, como en el 2014. Más allá de las ridículas afirmaciones de algunos funcionarios en torno a la inflación esperada para el 2017 y considerando que la pérdida del salario en 2016 ha sido de 10 puntos, que se subestime las paritarias en torno a un 23%, como puede verse en el aumento de la recaudación de la seguridad social, es una falta de respeto hacia todos los trabajadores y los jubilados.

El gobierno está dispuesto a profundizar el ajuste a pesar de la enorme contracción del mercado interno que promovió este año y de cómo esto ha impactado en el nivel de actividad. Por eso digo que no sólo peca de falta de sensibilidad social, sino también de visión a mediano plazo.

Resalto lo de los jubilados porque esa fórmula que algunos defendían tiempo atrás en 2017, según este presupuesto irá detrás de la inflación. La movilidad jubilatoria que defendió el gobierno anterior se compone de dos fórmulas, siempre ajusta para abajo, porque la Ley dice que siempre se debe tomar la menor.

Y hay dos datos más que agravan esta situación y sobre los que quiero profundizar: la disminución de transferencias de gastos corrientes y la balanza comercial. Las transferencias corrientes disminuyen un punto y medio porcentual año a año en valores absolutos, sin considerar que la inflación anual del 2016 está arriba de los 40 puntos. Es decir una contracción fenomenal. ¿Cómo va a hacer el Estado nacional para gastar menos? Uno supone sobre todo por lo que suelen decir los ministros, y en especial Juan José Aranguren, que esa baja brutal va a ser en los subsidios al transporte y a los servicios públicos, aunque es probable también que se pretenda ajustar aún más los salarios estatales, ya que los gastos de administración gubernamental sólo aumentan un 18.7%.

Claramente esto impacta sobre los sectores asalariados a los que ya les estiman una paritaria insuficiente que no recompone lo que se ha perdido este año y vuelve a suponer una disminución del salario real. Como decíamos, esto impacta en el mercado interno, en el consumo y en el nivel de actividad.

El otro punto importante es el déficit de la balanza comercial, que se triplica en 2017, se sextuplica en 2018 y es 8 veces el de este año para 2019. Repito por si no se me escuchó bien: estamos hablando del déficit creciente de la balanza comercial.

Las exportaciones no van a cubrir lo necesario para poder importar a pesar de todas las cosas malas que han dicho el ministro de Economía y el Presidente de la Nación durante la campaña acerca de déficit con el enorme impacto negativo en el empleo. Son muchas las actividades a las que hoy les cuesta vender sus productos en el mercado interno y encima tienen que pelear con la importación indiscriminada, y esto lo pude ver de

Dirección de Información Parlamentaria

primera mano recorriendo Pymes en el conurbano bonarense en los últimos meses. Este presupuesto asusta a sectores como el automotriz, el calzado, el textil y otros a los que las políticas de ajuste les han achicado el mercado interno. El gobierno no los protege y ni siquiera les permite el acceso al crédito, sino que le sigue prometiendo segundos semestres que no llegan.

A esto debemos agregarle la promesa siempre postergada, no ya de la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores -como dijo Macri en campaña- sino al menos del aumento del mínimo no imponible y las escalas, que lo pagan cada vez más trabajadores como puede verse en los informes de la AFIP.

Los caballitos de batalla del gobierno son el campo y la inversión pública en la construcción, lo que demuestra una vez más la falta de comprensión de los problemas que tiene nuestro país. Necesitamos más y mejor trabajo y eso se logra con un mercado interno pujante, con innovación tecnológica y empleo de calidad que promueva el consumo.

Quizás justamente por esa misma falta de visión es que buscan desfinanciar la investigación científica, porque quieren que la Argentina vuelva a ser un país que sólo produce materias primas y para muy pocos. El peligro de esto es que esas actividades no pueden generar trabajo para todos los argentinos.

Es importante que el Ejecutivo entienda la necesidad de devolver al bolsillo del trabajador lo que viene perdiendo en estos últimos años, para que desde un mercado interno robusto podamos planificar una nación con un desarrollo industrial que incluya a todos los argentinos. Estamos hablando de un país que tiene más de un 30% de pobres que no necesitan planes sociales, sino trabajo registrado con salarios dignos.

En síntesis, tenemos un presupuesto que muestra que se sostiene un déficit del 7% respecto del PBI cuando Macri prometió que en el 2016 iba a ser del 6% y que perdimos el superávit comercial, muestra una caída de salarios y un endeudamiento sideral que no se refleja para nada en la inversión pública y con el agravante de que ha pasado un año y sólo hemos visto promesas.

No le pedimos al Gobierno que corrija en un año todos los desaciertos económicos que cometió la gestión anterior, pero al menos le pedimos que no continúen el mismo error de forzar un presupuesto que poco tiene que ver con la realidad y dejen de poner de excusa la pesada herencia para comenzar a poner en marcha la Argentina del desarrollo, pero sobre todo queremos que tenga en cuenta a los argentinos que día a día caen bajo la línea de pobreza o pierden su empleo.

21. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ROSSI

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

El proyecto de presupuesto 2017, primera ley fundamental de la gestión del Presidente Macri, realmente no cambia demasiado lo que veníamos analizando en los presupuestos anuales para la Administración anterior, teniendo en cuenta además que la situación

Dirección de Información Parlamentaria

económica complicada que venimos soportando tampoco difiere de los últimos 2 años. Si bien se hace un análisis crítico que, con crudeza, refleja la actualidad económica plasmada en estadísticas y números más cerca de la realidad, en el proyecto de presupuesto 2017 se pierde la oportunidad de un verdadero cambio, como proponía Cambiemos, valga el juego de palabras.

Se refiere en la introducción a la falta de crecimiento de los últimos 5 años debido a la inflación (oculta), pero no se observa una intención de modificación o cambio de fondo, en mi opinión, sólo políticas de shock y a muy corto plazo porque, por ejemplo, no se habla de disminución del déficit fiscal; solo en ese punto hay un cambio de metodología, anteriormente, el ocultamiento de la inflación, las políticas de acuerdos de precios bajo presión y la emisión monetaria sin control eran las vedettes. Ahora, el déficit fiscal será mantenido mediante una disminución monetaria y mucho endeudamiento externo. Tenemos que recordar en este punto que el déficit fiscal tiene su origen principalmente por un exceso del gasto público.

Sin lugar a dudas considero que era la oportunidad para incorporar una modificación de la ley de coparticipación y presentar una reforma tributaria integral, para realmente incentivar la inversión y de esa forma, junto al nuevo posicionamiento de Argentina en el contexto económico mundial atraer los capitales tan necesarios para fortalecer y apoyar a cada uno de los trabajadores de nuestro país, a aquellos que han quedado fuera del sistema y que continúan peleando por conseguir un trabajo digno pero, para que ese suceda fehacientemente, debemos internalizar que reactivación económica no es lo mismo que crecimiento económico, para crecer como Nación y que Argentina vuelva a ser competitiva, seria y responsable, el Estado debe bajar la presión tributaria, el gasto público y como resultado disminuir el déficit fiscal, estableciendo como objetivo un proceso de desinflación exitoso.

Creo que el deseo de la sociedad argentina es darle un poco más de tiempo porque el país estaba en situación crítica cuando asumió el nuevo presidente pero pasado 10 meses estamos estancados y la esperanza se diluye en los problemas cotidianos.

El debate a corto plazo para lograr los objetivos propuestos en campaña es crear un país serio jurídica e institucionalmente, que incluya reforma tributaria, gasto público, endeudamientos, financiamiento a tasa de interés más bajas, etcétera.

Los gastos corrientes para el ejercicio 2017 se proyectan en un incremento que ronda el 21%; los gastos de capital, el 32%; el gasto por obra pública, 38% y el refuerzo de partidas para las transferencias de capital por obra pública llegan al 37%, lo que a las claras, manifiesta y fortalece la teoría de los años impares en Argentina -año electoral- de mantener el caudal de votos que se tiene e intentar mediante la obra pública, captar más votos en las elecciones intermedias que medirán y posicionarán para las generales.

Lo único que se observa claramente con una contracción son los ítems relacionados a los subsidios energéticos, lo que significa que el aumento de tarifas presionará aún más los flacos bolsillos de la gente.

Pero debemos agradecer la forma diferente de tratar esta ley de leyes, la visita de los funcionarios más importantes en el manejo de la economía del país contestando las preguntas formuladas -aunque las respuestas no fueran las esperadas-, la veintena de modificaciones aceptadas, cosa impensada en el tratamiento de presupuestos anteriores y el consenso respecto de las cajas previsionales de aquellas provincias que no las transfirieron.



Dirección de Información Parlamentaria

En la ley de reparación histórica a los jubilados, la Nación había convenido girarles \$ 14.000 millones, pero sin establecer un mecanismo de reparto.

Para evitar discrecionalidades, y a pedido de la oposición, se acordó que 8000 millones de pesos se repartan de manera automática según la población, el número de beneficiarios y el monto del déficit de la respectiva caja. Se incorporó una planilla anexa con nuevas obras públicas para las provincias; para ello, se incrementará en 4500 millones de pesos la partida del Ministerio del Interior y Obras Públicas.

Asimismo, el Gobierno girará 5000 millones de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) al Fondo Federal Solidario, que se nutre del 30% de las retenciones de la soja y cuyo destino específico es la realización de obras de infraestructura. Este acuerdo, en principio, les permitirá a los gobernadores contar con dinero fresco y de reparto automático.

Se les dio prioridad a obras por 25 mil millones en regiones que necesitaban refuerzos de inversión, con eje en el conurbano bonaerense y el Norte Argentino. Me alegra profundamente porque mi provincia, Córdoba, dejó de ser la Cenicienta junto a otras pocas que no figuraban en el listado como territorio argentino para el gobierno anterior.

Por eso cuando escuché a un diputado preopinante decir que con este presupuesto se pretende desde el Estado poner de rodillas a los gobernadores, se me cruzó automáticamente un viejo refrán que dice: “El ladrón cree que todos son de su condición”, pero prefiero decir: “Algunos ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, porque lo que no veían como oficialistas ahora lo ven como oposición.

Recordemos también que por no decirle a la ex presidenta a todo que sí o por no ser permanentes aplaudidores no se tenía en cuenta en el presupuesto a esas provincias.

Seguramente las aspiraciones de los cordobeses sea recibir más para rutas, gasoductos, acueductos, transporte, etcétera pero de casi nada a contemplar muchas de nuestras necesidades de infraestructura reconocidas en partidas, es un avance en el reconocimiento del federalismo, del diálogo y del consenso. Es entender la importancia de un distrito que produce y engrandece día a día junto al esfuerzo del resto de los compatriotas a esta maravillosa Argentina que merece y necesita despegar definitivamente para lograr ese lugar en el mundo que nunca debió perder.

Respecto de la modificación al artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, se acordó lenta y gradualmente, limitar los “superpoderes” que tiene el jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias. La intención es limitar esa discrecionalidad al 7,5% para 2017, bajando a 5% en 2018 y así sucesivamente prohibiendo además que el jefe de Gabinete arme programas transitorios que se usan para desviar partidas.

Otro punto importante que figura en el proyecto son los controles necesarios a fondos que hasta ahora no lo tenían, porque se armaban fideicomisos o no se rendían con la excusa del financiamiento externo.

Asimismo, se refuerza el rol de la Auditoría General de la Nación (AGN) a realizar auditorías, controles y a revisar las cuentas, balances y estados contables de Aerolíneas Argentinas, que hasta ahora no lo tenían. Ello en virtud de los giros y transferencias que realiza el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte.

Otro ítem modificado -de contralor- es la imposición de la obligación al Ministerio de Hacienda de presentar cómo se va desarrollando y ejecutando el plan financiero cada 90 días para observar que no se emita deuda para financiar gasto corriente.



Dirección de Información Parlamentaria

También se llegó a un acuerdo en la creación de un mecanismo para que el Estado nacional y municipios recuperen y exploten inmuebles abandonados con acuerdo de proyectos y división de ingresos.

El objetivo de la modificación es permitir un mayor equilibrio entre las facultades propias reservadas al Congreso y una razonable flexibilidad en la ejecución presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo, respetando lo establecido en nuestra Constitución Nacional. Recordando que actualmente el jefe de Gabinete está autorizado a “disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto”, es un comienzo auspicioso para restablecer la función de cada uno de los poderes del Estado.

En realidad, señor Presidente, entre el optimismo exultante que refleja el discurso del oficialismo y lo apocalíptico del de muchos diputados del FPV, prefiero quedarme en el carril medio y expresar un sincero apoyo a esta ley no pensando simplemente en el triunfo del gobierno representado en varios nombres propios sino en el éxito en términos de bienestar del pueblo argentino.

Con un presupuesto no ideal pero que deseo sea posible y de cumplimiento real y la modificación a la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, pongo mi esperanza en una salida positiva a la encrucijada que estamos viviendo.

25. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA SCHMIDT LIERMANN

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

Vengo por el presente a solicitar la inserción en la ley de presupuesto 2017 del aumento del presupuesto de la Sedronar Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, con base en los fundamentos que seguidamente expongo.

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) coordina políticas nacionales de lucha integral contra las adicciones en todo el país. Además, las líneas de acción de la Sedronar están dirigidas a la constitución de redes comunitarias que funcionen como sostén y contención para favorecer la reducción de la demanda, buscando a la vez estrategias de participación en la elaboración de proyectos que apunten a la prevención fundamentalmente. Así también, colabora con la asistencia facilitando la ayuda y rehabilitación de personas que abusan o dependen de drogas, y que, carentes de recursos adecuados, no podrían acceder al tratamiento o recuperación. Por último, desde la Sedronar se coordinan en el ámbito nacional la información y las estrategias tendientes a detectar y desbaratar el comercio y distribución de drogas ilegales.

Ahora bien, la Coordinación de Prevención en Ámbitos Educativos, de la Dirección Nacional de Prevención de las Adicciones de la Sedronar, solicita los recursos necesarios para la producción y distribución de los materiales correspondientes a sus



Dirección de Información Parlamentaria

propuestas preventivo-educativas y sus líneas de acción para ámbitos de educación formal y no formal para todo el territorio nacional. Su misión es diseñar, implementar y monitorear propuestas preventivo educativas en ámbitos educativos, con articulación interministerial e intersectorial, para todos los niveles y modalidades de enseñanza en todo el territorio nacional; dicha coordinación desarrolla propuestas de prevención universal, selectiva e indicada en articulación con el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, otros ministerios nacionales, universidades, Ministerios de Educación provinciales, organismos provinciales responsables de la prevención de adicciones y representantes del Cofedro.

Las propuestas de prevención universal están conformadas por los proyectos integrales preventivos, que concretamente son mediaciones teórico-metodológicas para la comunidad educativa, y las orientaciones para el abordaje de los Lineamientos Curriculares para la Prevención de Adicciones, aprobados por el Consejo Federal de Educación. Así también, la propuesta de prevención selectiva se basa en los ESTAR en Prevención –Espacios Territoriales de Redes en Prevención-, con el desarrollo de diecisiete experiencias piloto en comunidades educativas del país. Por último, la propuesta de prevención indicada apunta a una guía de orientación para la intervención en situaciones de consumo problemático de sustancias en la escuela, con un desarrollo basado en el análisis atento de los protocolos y guías elaborados por las diferentes provincias. El marco conceptual y el paradigma preventivo elaborado cuenta con herramientas y juegos didácticos de apoyo pedagógico. Estas líneas de acción y herramientas están desarrolladas en formato de libro.

Todos estos materiales serán implementados durante el año 2017 según lo pautado en las presentaciones oficiales que se realizaron en las distintas provincias y en la Mesa Federal de Coordinación de Políticas Públicas, con participación de todo el país. A continuación, se detallan las necesidades de producción de materiales.

Los libros de líneas de acción teórico-metodológicas cuentan con 200.000 ejemplares de cada uno de los siguientes: proyectos integrales preventivos; orientaciones para el abordaje de los “lineamientos curriculares para la prevención de adicciones”; guía de orientación para la intervención en situaciones de consumo problemático de sustancias en la escuela.

Los libros de herramientas didácticas, 100.000 ejemplares de cada uno, comprenden materiales para escuelas primarias libro para el docente y libro para el alumno y materiales para escuelas secundarias libro para el docente y libro para el alumno; materiales didácticos 65.000 kits de juegos didácticos diseñados por la Coordinación de Prevención en Ámbitos Educativos y 17 kits de producción audiovisual para las pruebas piloto de los Espacios Territoriales de Articulación de Redes en Prevención.

A continuación, se detallan las necesidades de distribución de materiales: servicio de Correo Argentino para la distribución hacia las veinticuatro provincias del país.

De la misma forma, quiero felicitar la oportuna observación del diputado nacional Marcelo Wechsler, cuyo objeto giró en torno al pedido de aumento de 170.000.000 de pesos para el programa de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario CAAC dependiente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico Sedronar.

Por todo lo expuesto, y visto y considerando la relevancia del trabajo diario realizado por la Sedronar, es que solicito el aumento del presupuesto destinado a sus actividades.



30. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA VOLNOVICH

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.

A nivel general, este presupuesto refleja quienes son los ganadores y los perdedores de este modelo: apertura financiera, endeudamiento, ajuste para paliar el déficit que el mismo gobierno genera al llevar adelante una espectacular política de transferencia de recursos a los sectores concentrados, los bancos, los acreedores, etcétera

Voy a hacer referencia al área de Educación. Analizando la prioridad que el Estado nacional le da a la educación, el dato significativo es que se destina más dinero al pago de la deuda externa que a la educación, aumentándose un 70 por ciento el pago de la deuda con respecto al 2016. Se transferirá a los acreedores del Estado Nacional un 55 por ciento más de los recursos que se invertirán en educación.

El recorte que recibe la educación es inocultable, como también lo es el de la ciencia y la tecnología, a pesar de las incorporaciones que terminaron agregando para que no renuncie el ministro y poder paliar la presión social que vimos en las calles. Habrá que hacer “marcos peña” con esos 1.290 mil millones, monto que de todas formas quedo lejos del pedido de la comunidad científica.

En términos generales, el incremento presupuestario es solo del 27,2 por ciento nominal en relación con la proyección del presupuesto de 2016. Claramente no alcanza, pero además es tramposo, porque ese presupuesto educativo ha absorbido áreas y funciones que antes llevaban adelante otros ministerios: toda la Secretaria de Deportes, los montos que antes pertenecían a ANSES (Conectar Igualdad), obras del Ministerio de Planificación, etcétera, hoy son absorbidos por Educación. Creemos que para seguir adelante con las políticas de inclusión de los últimos años y el mandato de la ley, se requiere de un aumento presupuestario de 21.644 millones de pesos más.

Por un tema de tiempo me referiré a algunos ejemplos de lo que pasó con el presupuesto educativo. Uno es el caso del Plan Fines. Este plan perdió su partida presupuestaria, es decir, no tiene renglón en el presupuesto. No es mucho, ni poco; es cero. Los 700 millones que tenía asignado en 2016 no sólo que no se incrementaron sino que directamente desaparecieron.

Esto expresa lo obvio: El Plan Fines dejó de ser una política nacional. A los 600.000 estudiantes que deben estar cursando en las aulas de la Argentina, les decimos desde acá que el Estado nacional no le garantiza la cursada; ahora depende –suponemos de su gobernador, ya veremos cómo les va cuando la plata no llegue a la provincia.

Quiero contarles un ejemplo de cómo es el federalismo que nos propone este presupuesto. El Plan Fines, para seguir con el mismo ejemplo, no está en el presupuesto nacional porque dicen que van a mandar el dinero a las provincias en un menjunje de dinero que con rótulo dinero mal gastado en los pobres. Lo llamo así porque todas las políticas del kirchnerismo las metieron en una bolsa llamada fondos rotativos. Bueno, como no estaba en el presupuesto nacional fuimos al presupuesto de la provincia de Buenos Aires, pero el Plan Fines y las políticas socioeducativas tampoco están. Dicen

Dirección de Información Parlamentaria

que la plata viene de Nación. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Nada se sabe, oscuridad absoluta, falta de previsibilidad. En el manual del ajuste así se empieza a destruir una política pública.

Queremos recordar a este Congreso que la Ley de Educación Nacional obliga al Estado nacional a tomar acciones para la terminación de los estudios. Con “cero” pesos para el plan fines, y el recorte del 50 por ciento de presupuesto para la educación de adultos, este proyecto no está cumpliendo ese mandato.

Sin embargo, no todo tiene recorte. La función Evaluación, recibe un aumento del 126 por ciento, pero luego una mala: el Instituto de Formación Docente, organismo que centraliza la política destinada a la formación, disminuye un 24 por ciento su presupuesto en términos reales. En resumen, una idea simple y muy de los noventa: Evaluación sin formación, en contexto de un sistema meritocrático y un presupuesto de ajuste. Esto es igual a despidos, congelamiento de sueldos, paros, carpa blanca, todo otra vez.

Con respecto al FONID y a las compensaciones salariales, el oficialismo ha argumentado que los montos asignados en el proyecto de ley de presupuesto 2017 son significativos con respecto a las cifras del presupuesto anteriormente aprobado para el ejercicio 2016. Estos argumentos son engañosos. El presupuesto inicial 2016 de 10.000 millones de pesos no es un patrón de comparación adecuado porque no tenía incluidos los incrementos sobre el FONID y compensaciones salariales que fueron acordados este año en las negociaciones paritarias.

Por ello, junto a las gremiales docentes solicitamos que se incremente el Programa 98 para 2017 en 6.489 millones de pesos, a fin de garantizar condiciones de igualdad entre los docentes de todo el país. Esto también es calidad educativa.

Con respecto a las políticas socioeducativas por englobarlas de alguna manera, lo que se ha hecho es juntar los dos programas que los financiaban, el Programa 29 y el programa 33. Acá estaban los CAJ, CAI, orquestas infantiles y juveniles, distribución de libros, kits escolares, becas, los viajes a Tecnópolis, turismo educativo, Chapadmalal, etcétera. Son alrededor de 4.000 mil de pesos que el Estado nacional asignaba para estos programas y ahora ya no lo hará. No es posible pensar una educación de calidad sin la instrumentación de acciones que apunten a mejorar el acceso a la educación, mejorar las trayectorias y acortar las brechas socio económicas entre escuelas e individuos.

Seguramente este Congreso votará la obligatoriedad de sala de tres años antes de fin de año. La sala de tres, así como está planteado en el presupuesto, es inevitable. Están mal hechas las proyecciones de construcción y no contempla los sueldos docentes que deberán pagar las provincias.

El proyecto del Ejecutivo contempla la construcción de 440 jardines con un monto de 5.600 millones de pesos. Sin embargo, estos jardines están enmarcados en el proyecto de 3.000 jardines, como dice el mensaje. Ahora bien, Si el primer año hicieron cero, el segundo año proyectan hacer con suerte 440 jardines, ¿el tercero y cuarto año van a hacer 2.560? Mentira, otra promesa de campaña, al igual que el 1,5 por ciento para ciencia y tecnología que fue parte de la plataforma de campaña de Macri, y ya vimos lo que viene pasando con la ciencia.

Con respecto a las universidades, nos preocupa el recorte sufrido en becas universitarias destinadas a estudiantes de bajos recursos y a carreras científico- técnicas. Este proyecto del Ejecutivo contempla un recorte de 17.400 becas. Pagamos deuda externa pero



Dirección de Información Parlamentaria

dejamos a los jóvenes de menos recursos sin la posibilidad de estudiar en la universidad. No quiero dejar de mencionar el recorte que se realizó también al programa Progesar de 3.426 millones de pesos en términos nominales. Si a eso sumamos el tarifazo, los despidos, directamente los pibes no van a llegar y las universidades estarán vacías. Con respecto a la planilla B, a través de la cual el Jefe de Gabinete repartirá créditos adicionales solo para 21 universidades, la pregunta es: ¿por qué esas 21 universidades? ¿Con qué criterio? ¿Cómo fueron esos acuerdos? Entendemos que deberían ser incluidas todas las universidades y que el criterio de distribución debería ser acordado en el CIN.

Para finalizar, no quiero dejar de mencionar la situación crítica que está atravesando Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”, que depende de Garavano, ministro de Justicia. Creada por Ley N° 26.995, cuenta con una planta de 164 docentes y más de 900 estudiantes. La asignación presupuestaria para el año 2016 fue de 98 millones de pesos. Para 2017 están previstos 23 millones de pesos. No entendemos la justificación de semejante recorte.

Sabemos que si son capaces de mandar a la fuerzas de seguridad a meter presa a Hebe de Bonafini, cerrar esta universidad es moco de pavo, pero queremos recordar a este Congreso que al recortar el presupuesto de esta universidad se está incumpliendo la ley de su creación y violando el derecho a la educación de 900 estudiantes.

Este es un presupuesto vergonzoso, pero más vergonzoso aún son las negociaciones bilaterales del opo-oficialismo que pichuleó una obra, un peso más para alguno, a costa de este presupuesto del hambre y del desempleo, y en materia de educación nada. No hay en el dictamen de mayoría que negociaron más dinero para las políticas de inclusión educativa. Se ve que hay otro acuerdo entre Massa, Bossio y Macri: la educación pública inclusiva no es un valor prioritario.